



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/47/412

23 de septiembre de 1992

ESPAÑOL

ORIGINAL: ESPAÑOL/FRANCES/
INGLES

Cuadragésimo séptimo período de sesiones
Tema 93 del programa

DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA LIBRE DETERMINACION

Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos
humanos y de impedir el ejercicio del derecho de los pueblos
a la libre determinación

Nota del Secretario General

El Secretario General tiene el honor de transmitir a los Miembros de la Asamblea General, de conformidad con la resolución 46/89 de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1991, y la resolución 1992/6 de la Comisión de Derechos Humanos, de 21 de febrero de 1992, el informe preliminar elaborado por el señor Enrique Bernales Ballesteros (Perú), Relator Especial sobre la cuestión de la utilización de mercenarios.

Anexo

INFORME PRELIMINAR SOBRE LA CUESTION DE LA UTILIZACION DE
MERCENARIOS COMO MEDIO DE VIOLAR LOS DERECHOS HUMANOS Y DE
IMPEDIR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA LIBRE
DETERMINACION, PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL DE LA
COMISION DE DERECHOS HUMANOS

INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. INTRODUCCION	1 - 5	3
II. ACTIVIDADES DEL RELATOR ESPECIAL	6 - 35	4
A. Desarrollo del programa de actividades	6 - 7	4
B. Correspondencia	8 - 35	4
III. LOCALIZACION DE ACTIVIDADES MERCENARIAS	36 - 50	21
IV. ACTIVIDADES MERCENARIAS EN AFRICA	51 - 96	24
A. Aspectos generales	51 - 58	24
B. Angola	59 - 63	27
C. Liberia	64 - 70	28
D. Mozambique	71 - 84	30
E. Sudáfrica	85 - 96	33
V. PRESENCIA DE MERCENARIOS EN LA ANTIGUA YUGOSLAVIA	97 - 109	36
VI. ESTADO ACTUAL DE LA CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA EL RECLUTAMIENTO, LA UTILIZACION, LA FINANCIACION Y EL ENTRENAMIENTO DE MERCENARIOS ...	110 - 115	40
VII. CONCLUSIONES	116 - 131	42
VIII. RECOMENDACIONES	132 - 142	46

I. INTRODUCCION

1. La Asamblea General, por su resolución 46/89 del 16 de diciembre de 1991, reafirmó que la utilización de mercenarios y su reclutamiento, financiación y entrenamiento, son delitos que inquietan profundamente a todos los Estados y violan los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas (párr. 3). La Asamblea denunció a todos los Estados que persisten en el reclutamiento de mercenarios, o lo permiten o toleran, y que brindan a éstos facilidades para emprender actos de agresión armada contra otros Estados (párr. 5). Asimismo, instó a todos los Estados a que adopten las medidas necesarias y ejerzan el máximo de vigilancia contra la amenaza que entrañan las actividades de los mercenarios y a que garanticen, mediante medidas legislativas y administrativas, que su territorio y otros territorios bajo su control, así como sus nacionales, no se utilicen para el reclutamiento, la concentración, la financiación, el entrenamiento y el tránsito de mercenarios, ni para la planificación de actividades orientadas a desestabilizar o derrocar al gobierno de ningún Estado ni para combatir a los movimientos de liberación nacional que luchan contra el racismo, el apartheid, la dominación colonial, y la intervención u ocupación extranjeras (párr. 6).

2. La Asamblea General exhortó a todos los Estados a que presten asistencia humanitaria a las víctimas de situaciones producidas por la utilización de mercenarios, así como por la dominación colonial o foránea o la ocupación extranjera (párr. 7). Reafirmó que es inadmisibles utilizar los conductos de asistencia humanitaria y de otro tipo para financiar, entrenar y armar mercenarios (párr. 8), y exhortó a todos los Estados que aún no lo hayan hecho, a que consideren la posibilidad de tomar medidas inmediatas para firmar o ratificar la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios (párr. 9). Condenó la persistencia en el reclutamiento, la financiación, el entrenamiento, la concentración, el tránsito y la utilización de mercenarios, así como las demás formas de apoyo a los mercenarios, con el fin de desestabilizar y derrocar a los gobiernos de Estados de Africa y de otros Estados en desarrollo y combatir los movimientos de liberación nacional de los pueblos que luchan por ejercer su derecho a la libre determinación (párr. 2). Asimismo, observó con grave preocupación la utilización por el régimen racista de Sudáfrica de grupos de mercenarios armados contra los movimientos de liberación nacional y para la desestabilización de los gobiernos de Estados del Africa meridional (párr. 4). La Asamblea tomó nota con reconocimiento del informe del Relator Especial (A/46/459, anexo) (párr. 1) y le solicitó que presente a la Asamblea General durante su cuadragésimo séptimo período de sesiones un informe sobre la utilización de mercenarios, sobre todo en vista de los elementos adicionales que se señalan en su informe (párr. 10).

3. Durante su 48° período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos examinó el noveno informe del Relator Especial (E/CN.4/1992/12) y aprobó, sin votación, su resolución 1992/6, de 21 de febrero de 1992, por la que, tomando nota con agradecimiento del informe del Relator Especial decidió prorrogar el mandato del Relator Especial por tres años a fin de permitirle realizar nuevos estudios sobre la utilización de mercenarios y hacer las recomendaciones oportunas a la Comisión (párr.3); y pidió al Relator Especial que presente a la Comisión en su 49° período de sesiones, un informe sobre todos los

acontecimientos relativos a la utilización de mercenarios, dondequiera que se produzcan (párr. 4). La Comisión reafirmó que el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios deben ser considerados como delitos que causan gran preocupación a todos los Estados (párr. 1) y pidió a todos los Estados que todavía no lo habían hecho, que consideren la posibilidad de tomar medidas prontamente para adherirse a la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, o para ratificarla (párr. 2).

4. El Consejo Económico y Social, en su decisión 1992/225 del 20 de julio de 1992, aprobó la resolución 1992/6 de la Comisión de Derechos Humanos.

5. En cumplimiento de lo dispuesto por las resoluciones citadas, el Relator Especial tiene el honor de presentar a la consideración de la Asamblea General, con carácter preliminar, su décimo informe sobre la cuestión de la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación.

II. ACTIVIDADES DEL RELATOR ESPECIAL

A. Desarrollo del programa de actividades

6. El Relator Especial viajó a Ginebra el 26 de enero de 1992 con el objeto de inaugurar, en su condición de Presidente saliente, el 48º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos y presentar, al mismo tiempo, su noveno informe ante la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1992/12). El 29 de enero de 1992, durante el transcurso de la tercera reunión del período de sesiones, el Relator Especial presentó su informe dentro del punto 9 del programa, referente al derecho de los pueblos a la libre determinación y su aplicación a los pueblos sometidos a una dominación colonial o extranjera o a ocupación extranjera. Durante su permanencia en Ginebra el Relator Especial celebró consultas con representantes de diversos Estados y se reunió con miembros de organizaciones no gubernamentales. Realizó asimismo sesiones de coordinación con el Centro de Derechos Humanos, y en particular con la Sección de Procedimientos Especiales.

7. El Relator Especial volvió a Ginebra del 12 al 18 de julio de 1992, con el objeto de celebrar diversas consultas, mantener entrevistas y determinar las líneas generales del presente informe preliminar.

B. Correspondencia

8. El 29 de noviembre de 1991, la Misión Permanente de la República de Maldivas ante la sede de las Naciones Unidas en Nueva York envió al Relator Especial una nota verbal manifestando textualmente lo siguiente:

"La República de Maldivas fue víctima de un ataque de mercenarios el 3 de noviembre de 1988. Por invitación del Ministro de Relaciones Exteriores, visitó Maldivas el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la utilización de mercenarios. El informe del Relator Especial se publicó como documento A/45/488 de la Asamblea General, en relación con el tema 103 del programa 'Importancia de la realización universal del derecho de los pueblos a la libre determinación y de la rápida concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales para la garantía y la observancia efectivas de los derechos humanos', y con el título de 'Uso de mercenarios como medio para violar los derechos humanos e impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación: nota del Secretario General'.

Los países del Asia meridional son objeto de muchas tensiones políticas, internas y externas. Los grupos separatistas militantes de algunos de los países de la región pueden provocar actividades de mercenarios que pongan en peligro la soberanía de países pequeños como Maldivas. En efecto, el ataque armado contra el país perpetrado el 3 de noviembre de 1988 estaba directamente vinculado a uno de los movimientos separatistas de Sri Lanka.

La República de Maldivas ha firmado la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. En el momento actual el Gobierno está examinando a fondo la ratificación de la Convención y preparando un proyecto específico de ley relativo a los delitos que corresponden al ámbito de la Convención. En la actualidad se prohíbe todo entrenamiento militar ilegal de personas con arreglo al párrafo 6) del artículo 46 del capítulo 2 del Código Penal (Ley No. 21/81, del 15 de Yumada Al-Awwal de la hégira) de Maldivas."

9. Mediante comunicación de 3 de diciembre de 1991, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Guinea dio respuesta a la solicitud de información adicional requerida por el Relator Especial por carta de 18 de octubre de 1991, sobre los ataques mercenarios que Guinea había denunciado con anterioridad, imputables a hombres armados de la facción rebelde liberiana dirigida por Charles Taylor, que afectaron la zona sudoccidental del territorio guineano (véase infra, cap. IV, secc. C).

10. El 16 de enero de 1992, la Misión Permanente de la República Árabe de Egipto ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra dirigió una nota verbal transcribiendo la siguiente comunicación del Ministerio del Interior de dicho país:

"En lo que respecta a la solicitud formulada por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la utilización de mercenarios, en el sentido de que se le proporcione información sobre el tema, tengo el honor de declarar que en Egipto los mercenarios no despliegan actividad alguna que pueda poner en peligro la soberanía del país.

No es un secreto que en conferencias y seminarios internacionales celebrados con ese fin, Egipto ha condenado la utilización, el entrenamiento y la organización de mercenarios. Además, en la Organización de la Unidad Africana Egipto ha desempeñado un papel innovador sobre esta cuestión.

En lo que respecta a la legislación de Egipto relativa a este tema, la tendencia ha sido privar de la nacionalidad egipcia a todo egipcio que se inscribe en alguna organización extranjera o preste servicios militares en un Estado extranjero sin obtener permiso previo de las autoridades competentes de Egipto.

La legislación también tipifica de delito el que, sin el consentimiento del Gobierno, se reúna a soldados o se cometa algún acto de agresión contra un Estado extranjero y, de tal forma, se exponga al país al riesgo de guerra o al rompimiento de relaciones políticas."

11. Mediante comunicación de 23 de enero de 1992, la Misión Permanente de las Bahamas ante las Naciones Unidas informó al Relator Especial lo siguiente:

"El Commonwealth de las Bahamas no es Estado parte en ningún tratado internacional relativo a las actividades de mercenarios. La única legislación que se puede decir que abarque aspectos de tales actividades figura en el capítulo XXIV del Código Penal del capítulo 77 de los Estatutos Revisados de las Bahamas de 1987."

12. La Misión Permanente de las Bahamas adjunta a su comunicación una relación de las disposiciones de su derecho penal en las que se tipifican diversos delitos en los cuales podrían incluirse acciones de mercenarios (delitos contra la seguridad del Estado, traición, sedición, motín, concentración y reunión ilegales, reclutamiento ilegal, entrenamiento ilegal, delitos contra la paz pública, disturbios, etcétera).

13. En cumplimiento de lo dispuesto por la resolución 46/89 de la Asamblea General, y la resolución 1992/6 de la Comisión de Derechos Humanos, el Relator Especial remitió el 13 de abril de 1992, una comunicación a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, solicitándoles información sobre lo siguiente:

a) Sobre la eventual existencia de actividades de mercenarios que, en violación de la soberanía y las leyes de vuestro país, podrían haber tenido lugar o estar ocurriendo en vuestro territorio (reclutamiento, utilización, financiamiento, transporte, o entrenamiento de mercenarios);

b) Sobre la eventual existencia de actividades de mercenarios en territorio de otro país que afecten o pudieren afectar la soberanía de vuestro Estado y el ejercicio del derecho de vuestro pueblo a su libre determinación;

c) Sobre la eventual existencia de actividades de mercenarios en territorio de otro país que afecten o pudieren afectar la soberanía de otros países de su subregión, región o continente, y el ejercicio del derecho de otros pueblos a su libre determinación;

d) Sobre la legislación interna actualmente en vigencia y sobre los tratados internacionales en los que su país es parte, relativa a la proscripción de las actividades de mercenarios y de su utilización como medio de atentar contra la soberanía de otros Estados y contra el ejercicio del derecho de los pueblos a su libre determinación;

e) Posición del gobierno respecto a la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, adoptada por la Asamblea General el 4 de diciembre de 1989;

f) Sugerencias que a juicio del gobierno podrían ser útiles para enriquecer el tratamiento internacional del tema de la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación.

14. El 16 de abril de 1992, la Misión Permanente de Arabia Saudita ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra dio respuesta a la comunicación reseñada en el párrafo anterior expresando lo siguiente:

"a) En la Arabia Saudita no se realiza actividad alguna de mercenarios;

b) Ninguna actividad de mercenarios en territorios vecinos afecta la soberanía de la Arabia Saudita y el ejercicio del derecho de su pueblo a la libre determinación;

c) La legislación interna vigente de la Arabia Saudita y los tratados internacionales en los que es parte concuerdan con el derecho nacional e internacional respecto de las actividades de mercenarios;

d) Hemos aceptado la Convención Internacional de la Asamblea General, de 4 de diciembre de 1989;

e) No tenemos sugerencia alguna que presentar sobre este tema, del que se han ocupado debidamente las instituciones internacionales pertinentes."

15. La Misión Permanente de la República de Guinea Ecuatorial dio respuesta a la solicitud de información del Relator Especial mediante carta de fecha 27 de abril de 1992. En dicha comunicación expresa:

"En lo que concierne a la República de Guinea Ecuatorial, podemos asegurarle que este tipo de actividades de mercenarios nunca han tenido lugar en nuestro territorio y que el Gobierno de la Guinea Ecuatorial no permite ni ha permitido nunca la instalación de tales personajes en nuestro país.

Por otro lado, nosotros no podemos saber si tales actividades se desarrollan fuera de nuestras fronteras, por lo que sólo podemos afirmar lo que pasa en el interior de las mismas; para concluir, podemos garantizarle que nuestro país no se siente amenazado de ninguna manera y nuestra soberanía tampoco se encuentra afectada."

16. Mediante comunicación de 6 de mayo de 1992, la Misión Permanente de la República de Kenya ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra informó el Relator Especial lo siguiente:

"Mi Gobierno comparte la preocupación de muchas otras naciones amantes de la paz sobre el uso de mercenarios y se opone totalmente a su reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento; asimismo, figura entre los patrocinadores de la resolución 1992/6 de la Comisión de Derechos Humanos, de 21 de febrero de 1992, sobre el uso de mercenarios.

Por otra parte, no nos hemos visto directamente afectados por actividades de mercenarios y, en consecuencia, no estamos en posición de proporcionar la información solicitada.

En el caso de recibir alguna información sobre el tema que pueda serle de interés, no dejaré de transmitírsela."

17. La Misión Permanente del Sultanato de Omán ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, mediante comunicación de 8 de mayo de 1992, informó al Relator Especial lo siguiente:

"Tras haber examinado las cuestiones que menciona en su carta del 13 de abril de 1992, el Gobierno del Sultanato de Omán desea afirmar que el Sultanato de Omán no tiene actividad alguna de mercenarios en su territorio ni realiza o apoya actividades de mercenarios en los territorios de otros países."

18. El 2 de junio de 1992, la Misión Permanente del Gran Ducado de Luxemburgo ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra transmitió la siguiente respuesta del Ministerio de Justicia de dicho país a la solicitud de información del Relator Especial:

"a) En Luxemburgo no hay ni habrá ninguna actividad de mercenarios;

b) Ninguna actividad del tipo que usted menciona existe actualmente;

c) El Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo no tiene conocimiento de actividad alguna de esta índole en lo que concierne a los Estados miembros de la Comunidad Europea de la que Luxemburgo es parte;

d) Luxemburgo no posee ninguna ley que tipifique las actividades de los mercenarios propiamente dichas. En efecto, habida cuenta de que dichas actividades se desconocen en Luxemburgo, no ha habido hasta el momento actual ninguna necesidad de prohibir las diferentes formas de esas actividades. No obstante, Luxemburgo ha tipificado algunos delitos que podrían, en el caso necesario, servir de base jurídica para tramitar juicios contra los autores de actividades de mercenarios o sus cómplices.

Si bien tales delitos no tienen que ver concretamente con las actividades de mercenarios, podrían permitir tipificar al menos algunas acciones vinculadas a las actividades de mercenarios:

- La ley del 8 de agosto de 1985 relativa a la represión del genocidio;
- Los artículos 322 a 326 del Código Penal relativos a la asociación de delincuentes;
- El artículo 68 del Código Penal relativo a la participación en el delito;
- El artículo 331 del Código Penal relativo a la propuesta de cometer un delito;
- Los artículos 137, 138 y 141 del Código Penal relativos a delitos que tengan que ver con el ejercicio de los derechos políticos;
- Los artículos 113 a 135 del Código Penal relativos a los crímenes y delitos contra la seguridad exterior e interior del Estado;
- Los artículos 233 a 236 del Código Penal relativos a la coalición de funcionarios;

Luxemburgo no es parte actualmente en ninguna convención o tratado internacional que se refiere a la prohibición de actividades de mercenarios;

e) En el momento actual, Luxemburgo no tiene observación que formular sobre la Convención a la que se hace referencia;

f) Luxemburgo no tiene sugerencias que hacer al respecto;

Estaremos a su disposición para toda información adicional que desee obtener."

19. Mediante comunicación de 29 de abril de 1992, la Misión Permanente de la República de San Marino ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra informó que había transmitido a su Gobierno la solicitud de información del Relator Especial.

20. El 18 de mayo de 1992, la Misión Permanente del Principado de Liechtenstein ante la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York informó al Relator Especial lo siguiente:

"a) Ni en el territorio del Principado de Liechtenstein ni en el territorio de otros países existen actividades de la índole descrita;

b) El artículo 15 de la Ley sobre la protección del Estado, de 14 de marzo de 1949, estipula que toda persona que, siendo ciudadana de Liechtenstein, preste servicios militares en otro país sin haber obtenido el consentimiento del Gobierno, será condenada a tres años de cárcel como máximo;

c) Por el momento, no tenemos sugerencia alguna que presentar."

21. La Misión Permanente de la República de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, mediante comunicación de 2 de junio de 1992, expresó lo siguiente:

"Ratifico a usted que en el caso de Venezuela, aunque la legislación no hace mención expresa del término mercenario, existen principios y normas jurídicas que si bien no definen al mercenario tal y como lo hizo la resolución 43/106 de la Asamblea General, sí fijan posición en favor de la determinación de los pueblos y el respeto a la soberanía, los cuales demuestran fehacientemente que en Venezuela está sancionado y prohibido por la legislación vigente (Constitución Nacional, Código Penal, Código de Justicia Militar, Ley de Armas y Explosivos) la utilización de mercenarios."

22. Recuerda dicha Misión Permanente que mediante comunicación de 28 de junio de 1989 expresó, inter alia, lo siguiente:

"La posición de Venezuela de otorgar máxima importancia a la realización universal del derecho de los pueblos a las libertades fundamentales y a la rápida concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales para la garantía y la observancia efectivas de los derechos humanos, es expresión de la política que el Gobierno Nacional practica en cumplimiento de los principios consagrados en el Preámbulo de la Constitución Nacional, tales como: la igualdad social y jurídica, sin ningún tipo de discriminación, el respeto de las soberanías, la autodeterminación de los pueblos, la garantía universal de los derechos individuales, el repudio de la guerra, de la conquista y del predominio económico como instrumento de política internacional.

Cabe subrayar que en materia de descolonización, Venezuela en diferentes foros internacionales ha reiterado su adhesión al principio de la libre determinación de los pueblos consagrado en la resolución 1414 (XV) de la Asamblea General y en la Carta de las Naciones Unidas ...

En cuanto a la información requerida sobre la existencia de actividades mercenarias, tanto en sus fases previas como la realización de acciones mercenarias concretas, que obedezcan a iniciativas propias o de un tercero, con el propósito de organizar acciones de intervención militar que afectan la soberanía y libre determinación de un pueblo, en particular, la presencia de reclutadores y de mercenarios que utilicen el territorio del país para organizar actividades mercenarias, se señala que en Venezuela no existen tales actividades.

Sobre el requerimiento de información sobre situaciones similares al caso anterior, pero fuera del territorio nacional, en áreas territoriales que afectan la región en su conjunto o el continente o varios países sometiéndoles a la intervención de una Potencia extranjera o de un grupo privado que se vale del empleo de mercenarios para producir la agresión, el Gobierno venezolano no tiene información fidedigna, precisa y comprobable al respecto.

En lo que respecta a los tratados internacionales que se refieran a la cuestión de los actos mercenarios, cabe señalar que Venezuela es parte de los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, a saber:

- Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña (I);
- Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar (II);
- Convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra (III);
- Convenio de Ginebra sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra (IV).

En lo que respecta al Protocolo I o Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, Venezuela ha iniciado los trámites pertinentes, a nivel interno, para su debida adhesión.

En el caso del Estado venezolano se pueden citar principios y normas jurídicas que, si bien no definen la práctica de utilizar mercenarios contra los Estados soberanos y los movimientos de liberación nacional como un acto criminal, ni declaran como delitos punibles el reclutamiento, la financiación, el entrenamiento, y el tránsito de mercenarios, sí fijan la posición venezolana en favor de la determinación de los pueblos y el respeto a la soberanía, asimismo, demuestran fehacientemente que está sancionado y prohibido por la Legislación venezolana vigente (Constitución Nacional, Código Penal, Código de Justicia Militar, Ley de Armas y Explosivos) el uso de mercenarios, aunque no se hace mención expresa del término."

23. Recuerda asimismo la Misión Permanente de Venezuela que mediante su comunicación de 18 de julio de 1989 señaló también, inter alia, lo siguiente:

"La disposición de Venezuela de otorgar máxima importancia a la realización universal del derecho de los pueblos a las libertades fundamentales y a la rápida concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales para la garantía y la observancia efectivas de los derechos humanos, es expresión de las políticas que el Gobierno Nacional practica en cumplimiento de los principios consagrados en el Preámbulo de la Constitución Nacional, que a continuación se señalan:

'Con el propósito de mantener la independencia y la integridad territorial de la Nación, fortalecer su unidad, asegurar la libertad, la paz y la estabilidad de las instituciones;

Proteger y enaltecer el trabajo, amparar la dignidad humana, promover el bienestar general y la seguridad social; lograr la participación equitativa de todos en el disfrute de la riqueza, según los principios de la justicia social, y fomentar el desarrollo de la economía al servicio del hombre;

Mantener la igualdad social y jurídica, sin discriminaciones derivadas de raza, sexo, credo o condición social;

Cooperar con las demás naciones y, de modo especial, con las repúblicas hermanas del continente, en los fines de la comunidad internacional, sobre la base de recíproco respeto de las soberanías, la autodeterminación de los pueblos, la garantía universal de los derechos individuales y sociales de la persona humana, y el repudio de la guerra, de la conquista y del predominio económico como instrumento de política internacional;

Sustentar el orden democrático como único e irrenunciable medio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos, y favorecer pacíficamente su extensión a todos los pueblos de la tierra.'

... En párrafos anteriores se señalaron los principios enunciados en el Preámbulo de la Constitución Nacional (la igualdad social y jurídica, sin ningún tipo de discriminación; el respeto de las soberanías; la autodeterminación de los pueblos; la garantía universal de los derechos individuales; el repudio de la guerra, de la conquista y del predominio económico como instrumento de la política internacional, a continuación se indican los artículos de la Constitución Nacional relativos a esta materia:

'Artículo 131: La autoridad militar y civil no podrán ejercerse simultáneamente por un mismo funcionario, excepto por el Presidente de la República, quien será, por razón de su cargo, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales;

Artículo 132: Las Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución apolítica obediente y no deliberante, organizada por el Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación. Las Fuerzas Armadas Nacionales estarán al servicio de la República, y en ningún caso al de una persona o parcialidad política;

Artículo 133: Sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Todas las que existan, se fabriquen o se introduzcan en el país, pasarán a ser propiedad de la República, sin indemnización ni proceso. La fabricación, comercio, posesión y uso de otras armas serán reglamentados por la Ley.'

24. En adición a las normas constitucionales, la Misión Permanente de Venezuela informó de diversas disposiciones de su derecho interno (Código Penal; Código de Justicia Militar y Ley sobre Armas y Explosivos) en cuyos supuestos pueden quedar comprendidos los actos de personas o grupos de características similares a las de los mercenarios. Señaló por último la Misión Permanente de Venezuela, que los contenidos de sus notas de 28 de junio y 18 de julio de 1989, "siguen siendo válidos para responder a la mayor parte de los requerimientos del Relator Especial".

25. El 4 de junio de 1992, la Embajada de la República Popular de Angola en Alemania transmitió una carta dirigida al Relator Especial por el Ministro de Relaciones Exteriores de dicho país, que en su parte sustantiva señala lo siguiente:

"Tengo el placer y el honor de informarle de que, a raíz de los últimos acontecimientos ocurridos en el África meridional y en particular en Angola, caracterizados por la cesación de hostilidades entre Angola y Sudáfrica y por la entrada en vigor del cese del fuego en nuestro país, además de las reformas políticas en vigor, las actividades de mercenarios como fenómeno han perdido su teatro de operaciones en la República Popular de Angola ..."

26. Mediante nota verbal de 5 de junio de 1992, la Misión Permanente del Reino de Marruecos ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, comunicó la siguiente respuesta del Gobierno de dicho país a la solicitud de información formulada por el Relator Especial:

"a) Marruecos, que suscribe plenamente los principios, derechos y obligaciones derivados de la Carta de las Naciones Unidas y de las organizaciones internacionales de las que es miembro activo, funda permanentemente su política exterior en los principios de la igualdad soberana de los Estados, el respeto de su independencia política y su integridad territorial y el respeto del derecho de los pueblos a la libre determinación;

b) Asimismo, Marruecos, que no ha dejado jamás de prestar su apoyo a la lucha de los pueblos y sus movimientos de liberación en pro de la independencia, reitera su dedicación al principio de no recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones entre los Estados y considera que el arreglo pacífico de controversias es el medio más apropiado para garantizar la paz y la seguridad internacionales;

c) En lo tocante a la cuestión de la utilización de mercenarios, Marruecos señala que su territorio no ha servido jamás de base para actividad alguna de mercenarios. Todo lo contrario, Marruecos condena enérgicamente esas prácticas criminales que atentan contra la soberanía y la integridad territorial de los Estados y el derecho de los pueblos a la libre determinación;

d) Fue en ese espíritu que Marruecos firmó, el 5 de octubre de 1990, la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. Su adhesión a ese

importante instrumento demuestra una vez más la firme voluntad de Marruecos de contribuir eficazmente a los esfuerzos que despliega la comunidad internacional tendientes a combatir las actividades de mercenarios."

27. El 22 de junio de 1992, el Relator Especial envió la siguiente comunicación al señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú:

"He sido informado que el señor Presidente de la República del Perú, en un discurso pronunciado el 7 de junio de 1992, habría afirmado que existen indicios de participación de mercenarios extranjeros en la realización del atentado contra una cadena de televisión en Lima, cometido el 4 de junio de 1992, que ocasionó la muerte de cuatro personas, veintiocho heridos y daños materiales de consideración. En una conferencia de prensa posterior, el Presidente de la República habría ratificado dichas afirmaciones, expresando que mercenarios extranjeros habrían también participado en la comisión de otros atentados recientes en la ciudad de Lima.

Como es de su conocimiento, la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989, no limita la definición de mercenario a quien participa en un conflicto armado. El artículo primero numeral segundo de dicha Convención, establece que 'se entenderá también por mercenario toda persona que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, para participar en un acto concertado de violencia con el propósito de derrocar a un gobierno o socavar de otra manera el orden constitucional de un Estado, o de socavar la integridad territorial de un Estado; que tome parte en ese acto animada esencialmente por el deseo de obtener un provecho personal significativo y se halle incitada por la promesa o el pago de una retribución material; que no sea nacional o residente del Estado contra el que se dirija ese acto; que no haya sido enviada por un Estado en misión oficial; y que no sea miembro de las fuerzas armadas del Estado en cuyo territorio se ejecute el acto'.

En cumplimiento del mandato otorgado por la resolución 46/89 de la Asamblea General, adoptada el 16 de diciembre de 1991, y por la resolución 1992/6 de la Comisión de Derechos Humanos, adoptada el 21 de febrero de 1992, según las cuales debo informar a dichos órganos, en sus próximos períodos de sesiones, 'sobre todos los nuevos acontecimientos relativos a la utilización de mercenarios, dondequiera que se produzcan', me permito solicitar a su Gobierno información detallada sobre la presencia y actuación de mercenarios extranjeros en el Perú, y, en particular, sobre su participación en la comisión de los hechos denunciados recientemente por el señor Presidente de la República."

28. Mediante comunicación de 9 de julio de 1992, la Misión Permanente de la República de Guyana ante la Sede de las Naciones Unidas informó al Relator

Especial que "Guyana no conoce actividad alguna de mercenarios que pueda haber violado la soberanía o contravenido la legislación de Guyana. Por otra parte, no dispone de legislación interna relativa a mercenarios".

29. El 14 de julio de 1992, la Misión Permanente de Austria ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra transmitió la siguiente información de su Gobierno en respuesta a la solicitud del Relator Especial:

"Hasta el momento, las autoridades austríacas no tienen conocimiento acerca de actividades relativas al reclutamiento, la utilización, la financiación, el transporte o el entrenamiento de mercenarios en Austria ni acerca de actividades análogas en los Estados vecinos que sean contrarias a los intereses de Austria.

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 279 del Código Penal de Austria (Gaceta Jurídica Federal, No. 60/1974), toda persona que establezca una asociación armada sin autorización legal, o que dirija tal asociación, o que promueva participación en ella, reclute o entrene para el combate o que fomente dicha asociación al proporcionar municiones, transporte, telecomunicaciones o dinero, comete un delito y se expone a la pena de cárcel por un máximo de tres años, independientemente de que esas actividades se dirijan contra Austria o contra terceros.

En este contexto cabe mencionar que, en virtud del párrafo 2 del artículo 320 del Código Penal de Austria, también se castiga el reclutamiento de voluntarios para la guerra o conflictos armados."

30. Mediante comunicación de 23 de julio de 1992, la Misión Permanente del Ecuador ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra dio respuesta a la solicitud del Relator Especial manifestando lo siguiente:

"A. (Información sobre la eventual existencia de actividades de mercenarios que, en violación de la soberanía y las leyes de vuestro país, podrían haber tenido lugar o estar ocurriendo en vuestro territorio (reclutamiento, utilización, financiamiento, transporte, o entrenamiento de mercenarios)):

En el Ecuador, no se ha detectado escuela de entrenamiento para mercenarios. En épocas pasadas se han identificado varias casas llamadas de 'Seguridad' o 'Milicianas', en las cuales elementos nacionales y extranjeros de los grupos subversivos que actuaban en el país eran entrenados para realizar actos en contra de la Ley, específicamente miembros del grupo subversivo M-19 de Colombia.

Por otra parte, miembros del grupo subversivo ecuatoriano 'Alfaro Vive Carajo' (AVC), se conoce que han sido entrenados en Libia en aspectos teóricos y prácticos. Se ha comprobado que varios miembros viajaron el día 25 de septiembre de 1985 vía Iberia en el vuelo 922, recibiendo entrenamiento en el campamento de refugiados 7 de abril; y cuyas acciones delictivas se evidenciaron a partir del mismo año.

Existe, además, información que Libia ayudó económicamente al grupo AVC para que pueda estructurarse como movimiento guerrillero en el Ecuador; así mismo, el Frente de Liberación Nacional 'Farabundo Martí', de El Salvador, cooperó con miembros de AVC en el entrenamiento de sus miembros, como es el caso de Erazo Kethy Edelmira.

- B. (Información sobre la eventual existencia de actividades de mercenarios en territorio de otro país que afecten o pudieren afectar la soberanía de vuestro Estado y el ejercicio del derecho de vuestro pueblo a su libre determinación):

En el Ecuador se ha comprobado en dos ocasiones la presencia de sicarios o mercenarios en su definición estricta:

En 1989, en el caso de muerte de Peggy Magaly Moreno, Miriam Jeaneth Moreno y Reinaldo Villegas en la ciudad de Guayaquil por delincuentes colombianos, pertenecientes a una banda de delincuentes organizados internacionalmente, los mismos que fueron contratados para realizar este trabajo. Sus nombres son: Rubén Darío Zavala Suárez (a) el viejo Iván o Guajiro y Guillermo Antonio González Ospina.

En el mes de marzo de 1991, fue asesinada la doctora Normandía Cabrera y sus hijos por sicarios colombianos, siendo los autores materiales Luis Ramiro Quiroz Narváez, Carlos Alfredo Bastidas (a) El Negro, Andrés N. (a) El Suco y Javier N.

Por otra parte, en algunas acciones consideradas de magnitud realizadas por la guerrilla, han actuado extranjeros, especialmente miembros de los grupos guerrilleros M-19, Ejército Popular de Liberación, y Ejército de Liberación Nacional de la República de Colombia.

Entre otras podemos citar:

Asalto al rastrillo de la Policía Nacional el 12 de marzo de 1985, con la participación de los siguientes miembros del M-19: Seddano Gonzalez, Edgar Humberto (a) Levi, Ariel Hernando Carvajalino; Rodriguez Benites Hermes (a) Alfredo; Pedreros Narváez Jimmy (a) Vicente; Santacruz Cobo Harolf (a) Harolf; Gonzales Ruiz Morzat (a) Pedro; Gómez Rodolfo (a) Sócrates; Salvador N.; Williams N.; Amada N.; Sandino N.

Secuestro y muerte de Nahim Isaias Barquette por parte de elementos del AVC de Ecuador y M-19 de Colombia cuyos participantes colombianos fueron: Carmona Castañeda Fernando (a) Fabián; Guevara Sánchez José Henry (a) Marcos; Parra Afranto, Fayad Alvaro; Ortiz Hugo; Benavides Esteban Alfonso (a) Andrés, Sócrates; Sarmiento Tobón Germán (a) Federico, Jorge, Héctor, Miguel Lascano; Mendoza García, Gloria María (a) Marina, Sofía, La Negra; Centeno Venegas, Germán (a) Viejo, Edilberto; López Camelo Mario Germán (a) Chichis, René, Monito; Medina Semiterra, Fabián (a) Williams, Víctor; Herrera Cabagnaro, Angel Manuel.

Secuestro de Martín Berrocal en agosto de 1989 y posterior liberación previo el pago de rescate no determinado.

Secuestro de Scoth Heindall por parte del Ejército Popular de Liberación de Colombia.

En cuanto a la delincuencia internacional, en nuestro país en el año de 1989 operó una banda de colombianos, chilenos y ecuatorianos, la cual sembró la intranquilidad en nuestra sociedad, terminando sus acciones con el asesinato del Mayor de Policía Eduardo Zea López y el Cabo de Policía Luis Antonio Changoluisa; sus líderes eran los hermanos Estupiñán Rosero Y Zavala Suárez Rubén Darío, entre otros.

- C. (Información sobre la eventual existencia de actividades de mercenarios en territorio de otro país que afecten o pudieran afectar la soberanía de otros países de su subregión, región o continente, y el ejercicio del derecho de otros pueblos a su libre determinación):

No se han registrado grupos de mercenarios que atenten contra la soberanía del Ecuador. Cabe anotar, sin embargo, que la alianza entre la guerrilla y el narcotráfico ha causado grandes daños a países como Colombia y Perú; afectando indirectamente al Ecuador su situación de vecindad geográfica.

- D. (Información sobre la legislación interna actualmente en vigencia y sobre los tratados internacionales en los que su país es parte, relativa a la proscripción de las actividades de mercenarios y de su utilización como medio de atentar contra la soberanía de otros Estados y contra el ejercicio del derecho de los pueblos a su libre determinación):

La legislación ecuatoriana no contempla como caso especial al mercenario o sicario; la Constitución y Leyes dan un tratamiento igual al de cualquier ciudadano en caso del quebrantamiento de la norma jurídica y es así como toda acción que se considera como delito en el Código Penal ecuatoriano es juzgada por las leyes internas. La acción tipificada como delito es juzgada como tal.

La figura del sicario o mercenario no aparece en el Código Penal, pero sí está tipificado el secuestro, el homicidio, sea éste cometido por nacionales o extranjeros, serán juzgados en la misma forma.

El Ecuador no es suscriptor de Convenios Internacionales sobre esta materia.

- E. (Posición de vuestro Gobierno respecto a la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, adoptada por la Asamblea General el 4 de diciembre de 1989):

Mediante nota número 10897/DGT de 19 de junio de 1992, suscrita por el Secretario General, Embajador Mario Alemán Salvador, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó al Doctor Fabián Alarcón Rivera, Presidente del Honorable Congreso Nacional, la aprobación de la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios.

- F. (Sugerencias que a juicio de vuestro Gobierno podrían ser útiles para enriquecer el tratamiento internacional del tema de la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación):

La Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores establece en tres puntos su criterio al respecto:

La utilización de servicios de mercenarios, especialmente extranjeros, para procurar mediante la violencia el derrocamiento de un Gobierno, la desestabilización de las instituciones o el cercamiento territorial de un país, constituye una grave violación de los principios y normas del derecho internacional que precautelan la soberanía, la independencia y la integridad territorial de los Estados.

El Ecuador, en salvaguardia de sus intereses nacionales fundamentales, debe apoyar irrestrictamente cualquier procedimiento que arbitre la comunidad internacional para prevenir, impedir y sancionar delitos de esta naturaleza.

Vistos los innegables beneficios que se derivarán de la existencia de un instrumento internacional destinado a proteger eficazmente a los pueblos de esas amenazas y peligros, la Asesoría Jurídica considera oportunas las medidas que la Cancillería ha adoptado para que nuestro país adhiera cuanto antes a dicha Convención, cuyas disposiciones no contradicen la legislación vigente."

31. El 22 de julio de 1992, la Misión Permanente de la República de Namibia ante la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, informó al Relator Especial que "El párrafo b) del artículo 4 de la Constitución de Namibia estipula que perderán la ciudadanía namibiana las personas que presten servicio o se ofrezcan de voluntarios para prestar servicios en las fuerzas armadas o de seguridad de otro país sin obtener permiso por escrito del Gobierno de Namibia. En consecuencia, todo ciudadano que contravenga la Constitución es responsable de sus acciones con arreglo al derecho namibiano. Asimismo, en lo tocante a la resolución 46/88 de la Asamblea General, el Gobierno de Namibia estima que la realización de la libre determinación es una condición fundamental para la garantía y la observancia efectivas de los derechos humanos".

32. El 30 de julio de 1992, la Misión Permanente de Australia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, informó al Relator Especial lo siguiente:

"Por lo que respecta al párrafo d) de la carta del Relator Especial, Australia está en condiciones de proporcionar la información que figura a continuación:

La principal legislación interna pertinente en este caso es la Ley Penal de 1978 (reclutamiento e incursiones en el extranjero). Dicha Ley tiene por objeto impedir que las personas de Australia preparen o ejecuten incursiones ('actividades hostiles') en Estados extranjeros. Además, pretende evitar que se reclute en Australia a personas para prestar servicios en las fuerzas armadas de Estados extranjeros.

En el párrafo 3) de la sección 6 de la Ley se define la participación en actividades hostiles en un Estado extranjero como la ejecución de una acción para los fines de lograr cualquiera de los objetivos siguientes:

- a) Derrocar violentamente o por la fuerza al Gobierno;
- b) Participar en hostilidades armadas;
- c) Provocar por la fuerza o la violencia el temor público de muerte o lesión personal;
- d) Matar o lesionar a un funcionario público; y
- e) Dañar o destruir ilícitamente bienes del Gobierno.

En la sección 7 de la Ley se prohíben los preparativos para incursiones en Estados extranjeros con el fin de participar en actividades hostiles. La prohibición incluye en términos generales acciones preparatorias para participar en actividades hostiles en un país extranjero. Abarca específicamente la acumulación o el almacenamiento de armas, explosivos, venenos o armamentos para tales actividades, así como el suministro de dinero o bienes y la prestación de servicios relacionados con tales actividades.

En virtud del párrafo 2) de la sección 6 y del párrafo 2) de la sección 7, la Ley abarca todas las acciones perpetradas fuera de las fronteras de Australia. Se aplica la Ley si el presunto ofensor:

- a) Es ciudadano australiano;
- b) Reside ordinariamente en Australia; y
- c) Ha estado en Australia en algún momento durante el año anterior a la actividad delictiva para fines relacionados con dicha actividad.

En muchos aspectos, la aplicación de la Ley es más amplia que la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. Por ejemplo, la Ley no se limita a las actividades de personas motivadas por fines de lucro. Tengo entendido que el Comité ad hoc para la elaboración de la Convención Internacional utilizó esta Ley como documento de trabajo.

En los últimos años se ha tramitado un juicio en Australia relacionado con esta Ley.

En cuanto al párrafo e) de la carta del Relator Especial, Australia no fue miembro del Comité ad hoc para la elaboración de la Convención, pero las delegaciones australianas ante los órganos de las Naciones Unidas apoyaron en general la elaboración de una convención sobre este tema. El Gobierno está examinando ahora una propuesta para enmendar la Ley de forma que permita acceder a la Convención."

/...

33. La Misión Permanente de Turquía ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, mediante comunicación de 30 de julio de 1992, informó al Relator Especial lo siguiente:

- "a) Los mercenarios no despliegan actividades en Turquía y, en consecuencia, no hay violaciones de la soberanía ni las leyes del país;
- b) No se dispone de información sobre las actividades de mercenarios en el territorio de otro país que constituyan violaciones de la soberanía de Turquía;
- c) No se dispone de información sobre las actividades de mercenarios que afecten la soberanía de Estados en nuestra región;
- d) El párrafo I del artículo 128 del Código Penal de Turquía estipula lo siguiente:

Toda persona que reclute a soldados y se dedique a actividades hostiles contra un Estado extranjero sin el consentimiento del Gobierno, de manera tal que ponga al Estado de Turquía en peligro de guerra, será castigada con pena de cárcel de 5 a 12 años. Lo que constituye el delito de reclutamiento de soldados en virtud del artículo 128 difiere en gran medida de lo que constituyen los mercenarios con arreglo a la Convención.

Por otra parte, si bien en la Convención se prevé el castigo por el reclutamiento de mercenarios y las actividades de los propios mercenarios, en el artículo 128 del Código Penal de Turquía sólo se prevé el castigo de quienes recluten a mercenarios.

En consecuencia, no resulta posible vincular el delito de las actividades de mercenarios previsto en la Convención al delito de reclutamiento enunciado en el artículo 128 del Código Penal de Turquía.

El párrafo I del artículo 148 del Código Penal de Turquía dice lo siguiente:

La persona que reclute a soldados y los provea de armas para prestar servicios a un extranjero o para sus propios fines, sin la aprobación del Gobierno, en el territorio del país, será castigado con pena de cárcel rigurosa durante un período de tres a seis años;

- e) El Gobierno de Turquía no es parte en la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, de 4 de diciembre de 1989;

- f) Asimismo, Turquía, que no cuenta con experiencia activa ni pasiva respecto de la utilización de mercenarios, no tiene sugerencia alguna que formular sobre el tema."

34. Al momento de concluir la redacción del presente informe preliminar, el Relator Especial recibió comunicaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Guinea, de fecha 9 de julio de 1992; de la Misión Permanente de la República de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, de fecha 4 de agosto de 1992; y de la Misión Permanente de la República Federal de Yugoslavia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, de fecha 10 de agosto de 1992. Dichas comunicaciones contienen elementos fácticos, doctrinales y jurídicos de especial interés que requieren la lectura atenta y el análisis del Relator Especial, por lo que serán reseñadas en su próximo informe a la Comisión de Derechos Humanos.

35. Por último, y con ocasión de la visita realizada a Ginebra durante el mes de julio de 1992 para determinar las líneas generales y comenzar la redacción del presente informe preliminar, el Relator Especial envió comunicaciones a los Gobiernos de Angola, Mozambique y Sudáfrica, así como a los Estados que han surgido de la ex República Federativa Socialista de Yugoslavia. Estas comunicaciones aparecen reseñadas en los capítulos correspondientes del presente informe.

III. LOCALIZACION DE ACTIVIDADES MERCENARIAS

36. La localización de hechos concernientes a actividades mercenarias, ilustrados por el Relator Especial en sus informes precedentes, acredita que una actividad expresamente condenada por las Naciones Unidas y calificada como un delito que preocupa profundamente a todos los Estados, persiste bajo diversas modalidades, aunque las de tipo masivo se presentan habitualmente en relación con un conflicto armado en el que está de por medio el ejercicio del derecho a la libre determinación de un pueblo.

37. Cuando es éste el bien que se pretende afectar, el conflicto armado puede adquirir carácter internacional. Desde los años 1960 y a propósito de la descolonización de Africa, la activa presencia de bandas de mercenarios se presentó como un recurso de los intereses coloniales que querían permanecer en la región, afectándose el proceso de libre determinación del que emergía un nuevo Estado africano o promoviéndose situaciones de desestabilización bélica en las que el ingrediente mercenario era fundamental para la intensificación del conflicto armado y su internacionalización.

38. La agresión contra el ejercicio del derecho a la libre determinación es lo que podría denominar el modelo típico en el cual se recurre a bandas mercenarias. En este caso, un Estado se involucra en un conflicto armado con otro, desconociendo el derecho a la libre determinación del pueblo de éste o su soberanía territorial. Se incurre en actividades mercenarias, cuando se recurre al reclutamiento, la financiación, la utilización y el entrenamiento de mercenarios, para agredir al otro Estado parte en el conflicto, potenciando la propia capacidad bélica del Estado agresor o evitando éste sufrir desgastes militares mayores en sus propias filas.

39. En el contexto de un conflicto armado internacional, cualquiera sea su causa y naturaleza, la actividad mercenaria es siempre un hecho ilícito que potencia otro hecho internacionalmente ilícito o el quebrantamiento de principios de derecho internacional, como la agresión militar de un Estado

contra otro, la invasión y ocupación de su territorio, la intervención armada con el objeto de interferir en sus asuntos internos, o la violación de los principios de respeto a la integridad territorial de los Estados, la libre determinación de los pueblos, o de no intervención. También se presentan actividades mercenarias por parte de terceros Estados cuando éstos asumen la decisión de involucrarse en un conflicto armado internacional, de manera directa o indirecta, apelando, entre otros recursos, a la utilización de mercenarios.

40. El recurso a las actividades mercenarias constituye hoy en día una modalidad extendida que no sólo se presenta en los conflictos armados internacionales. Las evidencias reunidas en informes anteriores demuestran cómo en conflictos armados internos y "guerras de baja intensidad" se da la presencia de mercenarios en una de las partes en el conflicto y a veces en las dos partes. Esto se debe a que, por lo general, estos conflictos no solamente están vinculados a relaciones sociales, intereses económicos o tensiones políticas estrictamente internas. La interdependencia es un hecho de la sociedad contemporánea, como lo ha sido también hasta muy recientemente la existencia de bloques de poder internacional. En este contexto, no ha sido inusual que alguna de las partes en un conflicto interno recurriera a "ayudas internacionales", las mismas que solían llegar por la vía, aparentemente menos comprometida, de recursos para la contratación y financiación de bandas de mercenarios.

41. Existen casos complejos en los que la presunción de actividades mercenarias en conflictos internos no ha podido ser confirmada por falta de canales adecuados de información, así como por un silencio persistente sobre la presencia de agentes mercenarios cuando se apela a fuentes oficiales. El Relator Especial no ha podido obtener hasta el momento información verificatoria sobre presencia de mercenarios en conflictos armados internos con elementos y ramificaciones internacionales, tales como los del Afganistán, el Chad, el Líbano y el Sudán, entre otros.

42. La tercera modalidad de actividades mercenarias se presenta cuando apelan a éstos terceros Estados que intervienen en un conflicto armado interno por razón de sus propios intereses. Es el tipo más frecuente de actividades mercenarias en los últimos años en África. En efecto, el conflicto que aún subsiste en Mozambique presenta un componente mercenario en el que ha tenido participación una tercera Potencia de la región, Sudáfrica.

43. Una cuarta modalidad se presenta cuando un tercer Estado recurre a actividades mercenarias para afectar la soberanía y la libre determinación de pueblos que se encuentran ejerciendo plenamente ambos derechos. Es el caso del recurso a actividades mercenarias por parte de anteriores gobiernos de Sudáfrica para atentar contra el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos de Botswana, Lesotho, Seychelles, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe.

44. Las actividades mercenarias en conflictos armados internos expresan la evolución, movilidad y capacidad de adaptación de este tipo de actividades ilícitas. La existencia de diversos intereses de carácter político, ideológico, económico o de seguridad estratégica y la conveniencia de no

aparecer involucrados directamente, han llevado a terceros Estados a alentar actividades mercenarias a través de operaciones encubiertas o utilizando a una de las partes en el conflicto.

45. El Relator Especial ha constatado que el recurso al reclutamiento, la utilización y la financiación de mercenarios resulta útil a los intereses políticos, ideológicos, económicos o de seguridad estratégica de terceros Estados que no quieren aparecer involucrados directamente en un conflicto. Existen varias evidencias que demuestran cómo, para preservar una imagen de respeto a las leyes internacionales, terceros Estados alientan actividades mercenarias a través de operaciones encubiertas o utilizando a una de las partes en el conflicto para que sea ésta la que directamente reclute y contrate mercenarios. El recurso a estas actividades ilícitas se presenta así cuando un tercer Estado considera conveniente potenciar a una parte en el conflicto.

46. Esto no significa, sin embargo, que el recurso a actividades mercenarias se presente sólo en conflictos armados. Recientemente se ha comprobado que también pueden surgir como hechos aislados vinculados a ilícitos internacionales o a propósito de modificaciones relativamente imprevistas de la situación interna de un Estado o de la escena internacional. Existe una oferta de recursos mercenarios disponibles y grupos organizados para realizar actividades mercenarias con diversos objetivos inmediatos, pero que en sustancia afectan a la soberanía y la libre determinación de un pueblo o a la estabilidad de un gobierno constitucional. Es el caso de las vinculaciones existentes entre bandas de traficantes de drogas y de armas, con grupos armados irregulares que recurren al terrorismo, y con mercenarios, los cuales intercambian favores entre sí y se prestan mutuo apoyo, afectando con su violencia tanto a un país o a un pueblo determinado como a la comunidad internacional en su conjunto.

47. El Relator Especial quiere dejar expresa constancia de su preocupación por la intensificación de algunos conflictos internos y el surgimiento de otros durante 1992. Entre los primeros cabe mencionar el conflicto en Filipinas, que enfrenta, desde 1969, al Gobierno y a las fuerzas armadas de dicho país con el autodenominado Nuevo Ejército Popular del Frente Nacional Democrático; el conflicto en Myanmar, en el cual intervienen la Liga Nacional para la Democracia, la guerrilla Karen y la guerrilla de la comunidad musulmana de los Rohingyas; y el conflicto en Sri Lanka, que enfrenta el Gobierno y a las fuerzas armadas de dicho país con la organización autodenominada Tigres de Liberación del Ealam Tamil y que ha ocasionado ya más de 5.000 víctimas. Entre los segundos cabe mencionar el conflicto de Moldavia, cuyo Gobierno se enfrenta a las fuerzas secesionistas rusófonas de Transnistrie, conflicto que ha ocasionado durante 1992 el bombardeo de las ciudades de Bendery, Grigariopol y Doubossary; los conflictos en Georgia, Osetia del Sur, y, al interior de la Federación de Rusia, el conflicto en Chetchenia. Si bien estos conflictos se mantienen a un nivel estrictamente interno, de no resolverse pronto con expectativas de paz, el riesgo de que se recurra a actividades mercenarias es muy alto. Ya en su informe anterior ante la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1992/12, párr. 48) el Relator Especial señaló que al menos dos mercenarios de nacionalidad francesa habían participado en el conflicto de Myanmar, combatiendo al lado del movimiento

insurgente Karen; que un mercenario estadounidense habría participado en operaciones de reclutamiento de mercenarios en Filipinas en mayo de 1990, y que mercenarios de nacionalidad israelí brindaron entrenamiento militar en Sri Lanka. La agudización de los conflictos internos, como lo prueba la experiencia, eleva el riesgo del recurso a actividades de reclutamiento, financiación y utilización de mercenarios.

48. Existen aún recursos mercenarios disponibles y grupos organizados para realizar actividades mercenarias con muy diversos fines, tales como fortalecer sectores políticos precariamente instalados, favorecer u obstaculizar las acciones de grupos de oposición, e incluso llevar a cabo actos en sí mismos ilícitos y prohibidos, tales como atentados terroristas, participación en operaciones de tráfico de drogas y de armas, y actos sicarios matando por una remuneración.

49. Las motivaciones de los mercenarios suelen ser de diversa índole: puede tratarse de antiguos combatientes identificados compulsivamente por el oficio de hacer la guerra, de practicantes fanáticos de una opción ideológica incompatible con la tolerancia democrática o de personas o grupos intrínsecamente intolerantes. Pero en todos los casos y por más que habitualmente se niegue, intervienen siempre los factores de la paga y de la profesionalidad en el hacer la guerra, como elementos concurrentes que configuran el carácter mercenario de los extranjeros que planifican y ejecutan estas actividades ilícitas.

50. Las cinco modalidades de actividades mercenarias a que se hace referencia en el presente capítulo pueden ser realizadas por nacionales en su propio país, pero en este caso no se trata de actividades mercenarias, sino de hechos perseguibles como delitos de acuerdo a la tipología penal establecida en las correspondientes legislaciones internas. La condición de extranjero es, de acuerdo a la normatividad internacional sobre la materia, un elemento indispensable para la calificación de un delincuente como mercenario. Es preciso no obstante advertir que traficantes de drogas, de armas, terroristas y mercenarios suelen actuar como bandas internacionales interconectadas entre sí. Así, un grupo armado irregular que practica el terrorismo puede rápidamente convertirse en grupo mercenario al desplazarse a un territorio de un Estado limítrofe para cubrir y otorgar protección a una banda de narcotraficantes, o para ocupar una porción de territorio extranjero sustrayéndolo a la autoridad del Estado soberano.

IV. ACTIVIDADES MERCENARIAS EN AFRICA

A. Aspectos generales

51. El seguimiento de la situación política en Africa en relación al ejercicio del derecho de sus pueblos a su libre determinación y al respeto a la soberanía e integridad territorial de sus Estados, ha sido asunto que ha concentrado el interés del Relator Especial. Las actividades mercenarias constituyeron en dicho continente uno de los recursos empleados para impedir la progresiva aparición de nuevos Estados soberanos e independientes. En varios puntos del continente fueron estimulados conflictos internos en cuyo contexto se apeló al reclutamiento, financiación y utilización de mercenarios.

52. En el curso de los últimos 20 años, jóvenes países africanos sufrieron atentados contra la libre determinación de sus pueblos e integridad territorial de sus Estados, en los que fueron expresamente contratados agentes mercenarios que actuaron, muchas veces, con extrema crueldad, en detrimento de derechos fundamentales de las poblaciones afectadas. Angola, Benin, Botswana, las Comoras, Lesotho, Mozambique, Namibia y Zimbabwe, son países que sufrieron agresiones mercenarias en las que siempre el objetivo fue impedir la libre determinación, hacer inviables los gobiernos establecidos y someterlos al control de una potencia regional. El componente racista y el respaldo al sistema del apartheid es también otro de los elementos característicos principales de las actividades mercenarias en estos países.

53. Si bien recientemente se observan algunos cambios legales y políticos significativos en el régimen del apartheid, adoptado por la minoría blanca en Sudáfrica, es un hecho que a lo largo de las dos décadas precedentes, fueron gobiernos de Sudáfrica quienes promovieron situaciones de violencia y de tensión militar en el Africa meridional, con actos de agresión contra el derecho de los pueblos de dicha región a su libre determinación, en función de intereses políticos, de dominación económico-social y estratégicos. En esta actitud de provocación y hostilidad, Sudáfrica retuvo ilegalmente Namibia hasta 1990 y tanto directamente, como apelando a fuerzas mercenarias, fomentó conflictos o practicó actos de terrorismo y sabotaje en territorios de Botswana, Lesotho, Swazilandia y Zimbabwe, y ordenó ataques de comandos en Zambia. En su actitud de mantener el régimen del apartheid, que constituye en sí mismo una violación de los derechos humanos fundamentales del pueblo sudafricano y un crimen contra la humanidad, ordenó diversos atentados contra dirigentes de movimientos de liberación nacional africanos, algunos de los cuales fueron llevados a cabo por agentes mercenarios en países europeos.

54. Algunos de los conflictos internos, como el de Angola, han terminado; otros, como el de Mozambique, continúan. En otros, la intensidad de los conflictos internos ha disminuido, siendo visible en tales casos que ha bajado o desaparecido la presencia de mercenarios. En realidad, éstos nunca actúan autónomamente, son funcionales a la potencia o a los grupos de poder que los contratan. Al cesar o disminuir la intensidad de los conflictos militares, los mercenarios se repliegan a otros lugares. Es posible por ello observar que no hay mercenarios ahora en Namibia o en Zimbabwe, e inclusive en Angola, mientras que continúan en Mozambique, porque el conflicto en dicho país prosigue.

55. En todo caso, los mercenarios no se han retirado totalmente de Africa. Más apropiado sería afirmar que algunos se han replegado a Sudáfrica. Allí, en medio de contradicciones, de avances legales y retrocesos prácticos, la política de derogación del apartheid que impulsa el Presidente Frederik de Klerk, intenta consolidarse. Pero el proceso es complejo y es resistido por organizaciones racistas que en su afán de paralizar y boicotear el proceso, han reclutado mercenarios y constituido grupos paramilitares que activamente provocan actos de violencia racista e inclusive de enfrentamiento mortal entre diversas etnias sudafricanas.

56. En adición al establecimiento de grupos armados para combatir movimientos de liberación nacional africanos y desestabilizar gobiernos legítimos de dicha región, el Relator Especial no puede dejar de expresar su preocupación por el

recrudescimiento y agudización, en unos casos, y el mantenimiento, en otros casos, de diversos conflictos internos en dicho continente. El conflicto en Burundi ocasionó más de 3.000 muertos durante 1991. En el Camerún, sólo en febrero de 1992, los enfrentamientos entre tribus musulmanas rivales en el norte del país ocasionaron más de 100 muertos. En el Chad, subsistieron durante 1992 algunos enfrentamientos con fuerzas rebeldes leales al depuesto Presidente Hissène Habré. En Djibouti han tenido lugar conflictos entre los Afars, agrupados en el denominado Frente por la Restauración de la Unidad y la Democracia, y los Issas. El Níger hace frente a la rebelión de los Touaregs y Nigeria enfrenta violencias entre las etnias Tiv y Jukun. Existe un fenómeno de insurgencia en Rwanda, y la guerra de clanes y sub clanes en Somalia ha ocasionado que 500 niños mueran de hambre cada día por la imposibilidad de acceso a la asistencia humanitaria. Togo atraviesa por una situación delicada motivada por conflictos interétnicos y en el Sudán se desarrolla una guerra entre el Ejército de dicho país y la organización autodenominada Ejército Popular de Liberación de Sudán, conflicto que ha afectado a la ciudad de Bor. Si bien estos conflictos se mantienen fundamentalmente a nivel interno, de no resolverse pronto con expectativas de paz, existe un grave riesgo de aparición de actividades mercenarias, las cuales constituyen delitos que preocupan profundamente a todos los Estados de la comunidad internacional y del continente africano en particular.

57. Merece también la atención del Relator Especial la situación en el Zaire, país que sufrió durante 1991 sangrientos disturbios, actos de pillaje y excesos represivos. El Relator Especial ha recibido denuncias de que en varios de los disturbios referidos participaron mercenarios, instigándolos en algunos casos, y participando activamente en la comisión de hechos criminales, en otros. Algunos mercenarios, en uniformes de comando no oficiales, habrían sembrado el terror en las calles de Kinshasa durante las noches del 23 y el 24 de septiembre de 1991, y en Lubumbashi, durante los días 21 y 22 de octubre de 1991. Estos mercenarios no habrían sido perseguidos ni enjuiciados. A finales de 1991, algunos de los cerca de 6.500 miembros de la División Especial Presidencial participaron en la comisión de graves actos de violencia, robo y pillaje contra la población zaireña. En febrero de 1992, 2.000 zaireños buscaron refugio en Uganda, huyendo, según declararon, de las violaciones de mujeres, robos y saqueos practicados por militares y grupos paramilitares.

58. El 16 de febrero de 1992, el Ministro de Información zaireño indicó que al menos 13 personas fueron muertas por las fuerzas de seguridad que reprimían una manifestación en Kinshasa en favor de la democratización. La Liga Zaireña por los Derechos Humanos afirmó en cambio que los muertos fueron 32, incluyendo niños, y que otras 100 personas quedaron heridas por bala. La Conferencia Nacional Soberana, única vía posible para la democratización del país y el retorno a la estabilidad, fue suspendida en enero de 1992 por el entonces Primer Ministro, quien consideró que sus debates estaban profundizando las divisiones étnicas entre la población del país. Fue, sin embargo, posteriormente restablecida, y el 30 de julio de 1992 se logró un compromiso político global sobre la transición a la democracia.

B. Angola

59. Todos los informes anteriores presentados por el Relator Especial se refirieron detalladamente a la situación en Angola, debido al conflicto armado que afectaba a ese país y a la presencia activa de grupos de mercenarios dedicados a poner en práctica todo tipo de violencia contra el pueblo y el territorio angoleño. En 1988 y para un conocimiento directo de los hechos, el Relator Especial viajó a Angola. Desde entonces, los acontecimientos han evolucionado favorablemente hacia la paz. Los acuerdos negociados y suscritos entre las partes en conflicto han puesto en marcha un proceso de pacificación y reconciliación nacional, que debe llegar a su punto de mayor expectación con las elecciones democráticas a realizarse en septiembre de 1992.

60. El informe presentado por el Relator Especial a la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1992/12) ofrece una información amplia y cronológicamente ordenada del conflicto armado que por largos años afectó a Angola (párrs. 64 a 81). Como se sabe, se trata de un conflicto que duró más de 16 años y que causó mucha destrucción en un país que recién había accedido a su independencia y cuyas perspectivas de desarrollo eran óptimas. La guerra, alimentada intensamente desde el exterior y cuyos episodios más sanguinarios estuvieron a cargo de bandas de mercenarios contratados para afectar la libre determinación del pueblo angoleño, terminó felizmente, con la suscripción de los Acuerdos de paz de Estoril entre el Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, y el Jefe de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), Jonas Savimbi, el 31 de mayo de 1991, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal.

61. Salvo dificultades atribuibles al tiempo acumulado de desconfianzas y confrontación, los acuerdos de paz se están cumpliendo. El alto el fuego ha sido respetado y la desmovilización militar es igualmente un hecho, lo mismo que una distensión progresiva, aunque con algunos retrasos en relación con el calendario establecido para el acantonamiento de las tropas. Los avances de este proceso están ligados a la real voluntad de paz que anima a todos los angoleños y en su propósito está colaborando activamente la operación UNAVEM II de las Naciones Unidas, que tiene a su cargo la verificación del proceso de paz, incluidas las elecciones que deben realizarse, según las provisiones establecidas, en la tercera semana de septiembre de 1992. Respaldando la distensión y la paz, el Papa Juan Pablo II visitó Angola en junio de 1992.

62. En este contexto, el Relator Especial tenía prevista una visita a Angola, sujeta a la evaluación de los avances en el proceso de desmovilización, pacificación y democratización. Una de las presunciones es la del retiro de los mercenarios que operaban en el país, vistos los acuerdos que ponían fin a la guerra. Este extremo ha sido confirmado por la comunicación que el Ministro de Relaciones Exteriores ha enviado el 4 de junio de 1992 al Relator Especial, en la que señala que "las actividades de mercenarios como fenómeno han perdido su teatro de operaciones en la República Popular de Angola". En este contexto y atendiendo a una sugerencia del propio Gobierno angoleño, el Relator Especial ha estimado conveniente suspender su visita a Angola y, en todo caso, reprogramarla para después de las elecciones en ese país, y bajo circunstancias en que una visita del Relator Especial pudiese significar una contribución efectiva y de aceleración del proceso de pacificación y reconciliación en el país.

63. En todo caso, el balance positivo de la actual situación en Angola, salvo un foco de tensión, aparentemente bajo control, en Cabinda, y de algunos incidentes en el puerto de Lobito y en Malange, son determinantes para que el Relator Especial señale que las actividades mercenarias han cesado en Angola. No obstante, el Relator Especial ha dirigido una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, en la que renueva su respeto por el pueblo angoleño y su disposición para acudir, dentro del marco de su mandato, en todo lo que pueda apoyar, sostener y reforzar tanto la libre determinación de su pueblo, como su derecho a vivir en paz, seguridad y alcanzar el desarrollo.

C. Liberia

64. Mediante nota verbal de 20 de septiembre de 1991, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Guinea puso en conocimiento del Relator Especial que "la zona sudoccidental del territorio guineano ha sido víctima de violaciones muy flagrantes en 1991 a manos de hombres armados de la facción rebelde liberiana dirigida por Charles Taylor. Estas reiteradas incursiones han causado víctimas entre las poblaciones limítrofes. En el curso de estas acciones ofensivas, los rebeldes han arriado e incinerado la bandera nacional guineana". Agrega la comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Guinea, que "con posterioridad a la agresión de la República de Guinea en su zona limítrofe con Liberia perpetrada por los mercenarios de Charles Taylor, llegó el turno a la República de Sierra Leona de ser víctima de ataques por parte de estos mercenarios. Sin duda alguna estos actos constituyen violaciones flagrantes y reiteradas de la soberanía de los Estados agredidos y un atentado contra el derecho de los pueblos a la libre determinación. Los pueblos liberiano, guineano y sierraleonés siempre han mantenido muy estrechas y fraternas relaciones, como lo atestiguan los acuerdos bilaterales o trilaterales aprobados por los respectivos Gobiernos. Indudablemente esta situación conflictiva pone en peligro la paz y la seguridad en la subregión de Africa occidental".

65. El Relator Especial observó con preocupación la calificación de "mercenarios" utilizada por el Gobierno de Guinea para referirse a las fuerzas rebeldes liberianas dirigidas por Charles Taylor, y en consecuencia, se dirigió al Gobierno de Guinea solicitándole mayores precisiones sobre el denunciado carácter mercenario de dichas fuerzas y otras informaciones sobre las agresiones denunciadas.

66. Mediante comunicación de 3 de diciembre de 1991, el Gobierno de Guinea informó al Relator Especial que "a las 9.00 horas de la jornada del 28 al 29 de enero de 1991 se produjo una incursión en la República de Guinea por efectivos del Sr. Charles Taylor. La incursión se realizó en la aldea de Kobolvita del distrito de Bokoni en la prefectura de Macenta, situada en la región sudoeste del país. Hubo tres muertos y un herido; se quemaron tres casas, 11 cabañas y la bandera nacional".

67. Por su parte, Charles Taylor, Presidente del Frente Nacional Patriótico de Liberia (FNPL), acusó, el 3 de noviembre de 1991, al Gobierno de Sierra Leona de otorgar refugio a los antiguos soldados del Presidente Samuel Doe, y de permitirles lanzar ataques contra sus fuerzas desde territorio de dicho país.

Las tropas del FNPL realizaron sucesivas incursiones en el este y sur de Sierra Leona a partir de marzo de 1991. El 27 de noviembre de 1991 capturaron la ciudad de Daru, obligando a sus habitantes a huir hacia Kenema, y tomaron el puente sobre el río Mano, que constituye parte de la frontera entre los dos países.

68. El 20 de diciembre de 1991 el Presidente interino de Liberia, Amos Sawyer, denunció en Monrovia que las fuerzas de Charles Taylor estaban compuestas de "mercenarios, gangsters, estafadores y bandidos" que pretendían "destruir deliberadamente a la nación y al pueblo liberianos". Denunció asimismo que la ciudad de Côte d'Ivoire de Man, se había convertido en el principal centro de tránsito de armas y municiones destinadas a las fuerzas de Taylor, así como al Gobierno de Burkina Faso, por permitir también a los miembros del FNPL utilizar su territorio para abastecerse de armas. Posteriormente, el 12 de febrero de 1992, los Presidentes de Guinea, Liberia y Sierra Leona, reunidos en Freetown, expresaron su grave preocupación respecto a las actividades comerciales de ciertas empresas occidentales con el FNPL, que le permiten los recursos financieros necesarios para continuar la guerra.

69. En mayo de 1992, Liberia se encontraba partida en dos: la capital, Monrovia, bajo el control del Gobierno interino presidido por Amos Sawyer, se hallaba cortada del resto del país, controlado por las fuerzas de Taylor. La Fuerza Oeste-Africana de Interposición y Mantenimiento del Orden (ECOMOG) se limitaba al control del perímetro de Monrovia, dada la oposición del FNPL a su instalación en el resto del país. El 29 de abril de 1992 Amnistía Internacional denunció que en las zonas de combate con las fuerzas de Taylor, el Ejército de Sierra Leona había constituido tribunales irregulares que emitían sentencias de muerte sumarias contra los sospechosos de colaborar con los miembros del FNPL, fuerzas que habrían también cometido graves violaciones contra los derechos humanos.

70. El Relator Especial cree conveniente señalar que si bien la guerra liberiana ha sido fundamentalmente un conflicto armado interno, que opone a las fuerzas del FNPL de Taylor contra las fuerzas del Presidente interino Amos Sawyer y del Movimiento de Liberación Unido por la Democracia (ULIMO), los hechos de los últimos dos años muestran el peligro real de su pronta internacionalización, involucrando a los Estados de Guinea y Sierra Leona, por una parte, y Burkina Faso y Côte d'Ivoire, por la otra, con el peligro anexo de un recurso mayor a las actividades de mercenarios. Debe por lo tanto permitirse, con carácter inmediato, a las fuerzas de la ECOMOG el cumplimiento de las tareas para las que fue enviada al país, incluyendo su libre desplazamiento por todo el territorio nacional, y la supervisión de una inmediata concentración, desarme y desmovilización de las tres fuerzas enfrentadas. Sólo así podrán sentarse las bases necesarias para que el pueblo liberiano pueda ejercer plenamente su derecho a la libre determinación, a través, en primera instancia, de elecciones democráticas, pluripartidistas y representativas, impidiéndose al mismo tiempo la presencia, utilización y financiación de mercenarios ajenos a las expectativas de paz y de desarrollo de los pueblos del África occidental.

D. Mozambique

71. En los informes precedentes el Relator Especial se ocupó extensamente de la situación en Mozambique, país afectado por un grave conflicto interno desde la proclamación de su independencia y que hasta la fecha no puede ser resuelto. El Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), que ejerce el Gobierno desde 1975, es confrontado por la oposición armada del Movimiento Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO). Aun cuando las negociaciones por la paz se han iniciado en 1989, hasta la fecha no se llega a acuerdos positivos definitivos que signifiquen un efectivo alto el fuego seguido de un indispensable proceso de reconciliación nacional y completa pacificación.

72. En el desarrollo del conflicto interno, el Gobierno del FRELIMO no sólo sufrió la oposición armada de la RENAMO, sino que ésta obtuvo la ayuda, primero, del régimen racista de Rhodesia antes de que se constituyera en Estado soberano de Zimbabwe, así como también del Gobierno de Sudáfrica. En el contexto de estas ayudas, el territorio de Mozambique ha sufrido diversos atentados atribuidos a grupos de mercenarios, pues éstos fueron involucrados en el conflicto interno para potenciar la capacidad militar de los sectores opuestos al Gobierno del FRELIMO.

73. El Gobierno de Zimbabwe, mediante comunicación de 8 de noviembre de 1991 dirigida al Relator Especial por el Representante Permanente de dicho país ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, hizo referencia a la participación del Servicio de Inteligencia de la antigua Rhodesia en la creación de la RENAMO, como una medida de represalia contra el Gobierno de Mozambique por permitir que el Ejército de Liberación Africana de Zimbabwe (ZANLA) tuviera bases en su país desde las cuales libraban la guerra de liberación. Hizo asimismo referencia a la participación de las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica (SADF) en el entrenamiento realizado en el Transvaal septentrional de diversos mercenarios que luego se integrarían en la RENAMO.

74. Durante 1989, la mediación del Presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, y del Presidente de Kenya, Daniel Arap Moi, logró el inicio de contactos indirectos entre el Gobierno de Mozambique y la RENAMO. En diciembre de 1989, ambos Jefes de Estado consideraron que se había llegado a una etapa que permitía el inicio de negociaciones directas entre las dos partes. Así, el 15 de mayo de 1990 tuvo lugar en Lisboa la primera reunión oficial desde el inicio del conflicto entre un representante del Gobierno y uno de la RENAMO. Posteriormente, ambas partes solicitaron la mediación de Italia, mediación que dio lugar al inicio de negociaciones que permitieron alcanzar un acuerdo de alto el fuego parcial, celebrado en Roma el 1º de diciembre de 1990.

75. En virtud del Acuerdo de Roma, la RENAMO se comprometía a respetar un alto el fuego en los corredores de tránsito Limpopo y Beira, que unen los puertos mozambiqueños de Maputo y Beira con Zimbabwe. Otro corredor de tránsito importante, el corredor Nacala-Malawi, que une el puerto norteño de Mozambique de Nacala con Malawi, no fue mencionado en el Acuerdo.

76. Durante las negociaciones de Roma, cada parte reconoció el derecho a la existencia de la otra. El 20 de diciembre de 1991 ambas partes se mostraron favorables a la celebración simultánea de elecciones presidenciales

y legislativas bajo la supervisión de observadores de las Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana, aunque no pudo celebrarse un acuerdo concreto al respecto. El 12 de febrero de 1992, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia anunció que dicho país sustituía el papel de mediador que había desempeñado durante la primera fase de las negociaciones por el de observador oficial en las mismas, conjuntamente con Portugal. El Gobierno de Mozambique habría manifestado su deseo de que los Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido actuasen también como observadores oficiales. Cabe destacar, por otra parte, que el 10 de diciembre de 1991, el Parlamento de Mozambique aprobó por unanimidad la Declaración Universal de Derechos Humanos.

77. Según la comunicación del Gobierno de Zimbabwe (ver infra párr. 68), elementos de la RENAMO, con la ayuda de mercenarios al servicio de la SADF, libraron también una guerra económica contra Zimbabwe, habiendo atacado el oleoducto de Beira-Mutare en no menos de 127 ocasiones entre 1982 y 1990 y destruido tanques de depósito de combustible en el puerto de Beira. La RENAMO atacó la línea ferroviaria Beira-Mutare, que une en forma directa a Zimbabwe con el océano Índico, en 292 ocasiones entre 1986 y 1991. Durante el mismo período se perpetraron 372 emboscadas contra el tráfico vial en la carretera adyacente que une Beira y Mutare.

78. De otro lado, el Relator Especial ha recibido informaciones que indican que durante la primera semana de 1991 la RENAMO realizó cinco ataques contra el corredor de Beira y uno contra el corredor de Limpopo, violando así el acuerdo de cese el fuego parcial. Los días 3 y 4 de enero de 1991, efectivos de la RENAMO atacaron la vía férrea Zimbabwe-Beira, y el 4 de enero atacaron tiendas y restaurantes en los suburbios de Beira. El 7 de enero atacaron Chimcio, la segunda ciudad más grande en el corredor de Beira. El 9 de enero se produjo un enfrentamiento armado en Motasse, en el corredor de Limpopo, resultando muertos dos efectivos de la RENAMO y heridos dos soldados del ejército de Mozambique. Los combatientes de la RENAMO efectuaron también ataques en el corredor de Nacala, no contemplado en el acuerdo de alto el fuego parcial.

79. En las zonas no contempladas por el Acuerdo de Roma, la guerra ha continuado con su habitual brutalidad. El 6 de enero de 1991, combatientes de la RENAMO ejecutaron a 18 personas en el pueblo de Chirindzene, en la provincia sureña de Gaza. De otro lado, la RENAMO inició violentos combates por tratar de obtener el control de la región central de Gorongosa. La carretera de Tete, que une Zimbabwe y Malawi, ha sido atacada también en varias oportunidades por combatientes de la RENAMO. En varias ocasiones, los ataques han terminado con la muerte de los chóferes de los vehículos que transitan por la carretera, y han impedido el transporte de la ayuda alimentaria de las Naciones Unidas con destino a los 820.000 refugiados mozambiqueños en Malawi. El 10 de diciembre de 1991, un ataque de la RENAMO contra la ciudad de Angoche en el norte del país ocasionó la muerte de 61 civiles, habiendo también muerto 10 atacantes. El 21 de diciembre de dicho año, fuerzas de la RENAMO ocuparon la ciudad de Namarroi, en la provincia de Zambezia, donde se ejecutaba un proyecto de desarrollo a cargo de una fundación británica.

80. El 1° de febrero de 1992, miembros de la RENAMO habrían ejecutado a 15 personas a golpes de hacha, cuchillos y garrotes cerca de Xai-Xai, en la provincia sureña de Gaza. Por su parte, durante enero de 1992, el Ejército de Mozambique habría dado muerte a 160 miembros de la RENAMO en distintas operaciones anti-insurgencia llevadas a cabo en todo el país. A fines de febrero de 1992, la RENAMO lanzó una nueva ofensiva militar. El 6 de agosto de 1992, miembros de la RENAMO atacaron una ciudad del interior, matando a nueve personas, e hicieron descarrilar un tren.

81. Estos hechos parecen demostrar que pese a las negociaciones en curso, las partes no han asumido una sincera actitud de lograr una paz justa y duradera al más breve plazo. La larga guerra civil ha convertido a Mozambique en uno de los países más pobres del mundo y causado más de 500.000 muertos. Más de un tercio de la población del país se encuentra en condición de refugiada o de desplazada: 1.280.000 mozambiqueños han buscado refugio en países extranjeros y 4,6 millones se han visto obligados a desplazarse a otras zonas del país. A ello debe sumarse la muerte de más de 500.000 niños menores de cinco años de edad, que hoy vivirían si el conflicto no hubiese estallado, así como las numerosas víctimas del hambre y la desnutrición.

82. En el contexto de este conflicto armado interno y en una perspectiva de evolución hacia la paz, el Gobierno ha dado curso a algunas iniciativas de democratización, a pesar de estar todavía constituido por un partido único. Sin embargo, el FRELIMO ha abandonado la ideología marxista-leninista y condenado el sistema de partido único, adoptando además diversas medidas de liberalización de la economía del país. Si bien estas decisiones han sido adoptadas unilateralmente, han sido formuladas con el propósito de aligerar las negociaciones con la RENAMO y como elementos importantes para la apertura democrática.

83. El Relator Especial cree necesario destacar que el 5 de agosto de 1992, se iniciaron en Roma conversaciones entre el Presidente de Mozambique, Sr. Joaquim Chissano, y el jefe de la RENAMO, señor Alfonso Dhlakama, en presencia del Presidente de Zimbabue, señor Robert Mugabe, y de los Ministros de Asuntos Exteriores de Botswana e Italia, orientadas a reanudar el proceso de negociaciones para alcanzar una paz justa y duradera. El 7 de agosto ambas partes suscribieron una declaración común, comprometiéndose a celebrar un acuerdo de paz definitivo antes del 1° de octubre de 1992. Era la primera vez que el Presidente de Mozambique y el jefe de la RENAMO se encontraban desde la proclamación de la independencia del país en 1975. Ambas partes suscribieron además acuerdos parciales, garantizando la seguridad en los corredores de comunicación Beira y Limpopo, y estableciendo que en el plazo de un año a partir de la firma de un acuerdo de cese el fuego global, tendrán lugar elecciones pluralistas y representativas.

84. El Relator Especial reitera su convicción de que una paz con justicia y la consolidación de la democracia en Mozambique, con pleno respeto de los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad personal y a la seguridad de todos los ciudadanos, se lograrán cuando cese toda interferencia extranjera y se garantice el pleno ejercicio del pueblo de Mozambique de su derecho a la libre determinación. Sólo así podrá garantizarse la eliminación de la presencia de mercenarios en el país. En este contexto el Relator Especial se ha dirigido al Gobierno de Mozambique manifestándole su interés en visitar el

país dentro de los alcances de su mandato, de manera que una observación in loco pueda contribuir a reforzar el apoyo de la comunidad internacional en favor de la paz, el ejercicio de la libre determinación, y el pleno goce de los derechos humanos del pueblo de Mozambique.

E. Sudáfrica

85. El Relator Especial se ha referido en todos sus informes anteriores a los conflictos en el Africa meridional y a la relación existente entre estos conflictos y la política de apartheid promovida por anteriores Gobiernos de Sudáfrica. En estos conflictos el componente mercenario ha desempeñado un papel clave para afectar el goce de los derechos humanos y el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos de dicha región africana. Al mismo tiempo, los informes precedentes han hecho amplia referencia a la lucha de la población mayoritaria sudafricana para liquidar el régimen de segregación racial. El Congreso Nacional Africano (ANC) tuvo a lo largo de los últimos años la conducción principal de la resistencia del pueblo sudafricano y de sus luchas por la libertad y la igualdad de derechos, habiendo sufrido por ello violentas persecuciones. Quedó en evidencia la responsabilidad de grupos de mercenarios en acciones represivas contra líderes del ANC y en masacres praticadas en suburbios habitados por la población mayoritaria negra. En su anterior informe a la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1992/12), el Relator Especial se refirió a las actividades ilícitas llevadas a cabo por el Civil Co-operation Bureau (CCB), organismo de las Fuerzas Especiales de la SADF; por la denominada "Unit C1", escuadrón de la policía sudafricana con base en Vlakplaas; y por el Security Department del Johannesburg City Council.

86. Cabe señalar que un mercenario de nacionalidad neozelandesa intentó colocar una bomba en la residencia del Director de Información del ANC en Lusaka, Thabo M'Beki, en 1986. Al ser detenido confesó que actuaba por cuenta del Gobierno de Sudáfrica, siendo condenado a 18 meses de prisión. Por otra parte, el mercenario de origen sueco Human, reveló a la representación del ANC en Zimbabwe, que fueron mercenarios los autores del asesinato de Dulcie September, representante del ANC en Francia, Luxemburgo y Suiza, acontecido en París el 29 de marzo de 1988.

87. Desde que el Sr. de Klerk asumió la presidencia de Sudáfrica, el Gobierno de dicho país inició un giro marcadamente reformista, orientado en un primer momento a una cierta liberalización de políticas y luego a un gradual proceso de desmontaje del régimen del apartheid y su sustitución por una organización política, social y económica, abierta y democrática. El informe del Relator Especial (E/CN.4/1992/12, párrs. 124 y 125) hace referencia a la derogación de las leyes relativas a la propiedad de la tierra, al hábitat separado, y a la clasificación racial de la población, así como a la modificación de la ley sobre seguridad interior de 1982. La celebración en diciembre de 1991, de la Convención por una Sudáfrica Democrática, reunió en Johannesburgo a 19 partidos políticos, 17 de los cuales aprobaron una "Declaración de intenciones" sobre la constitución de una Sudáfrica democrática y no racista, definiendo los principios generales de la futura constitución. Por otra parte, el 11 de diciembre de 1991 tuvo lugar la primera repatriación masiva de exiliados

políticos, habiendo retornado a Sudáfrica 120 refugiados en la República Unida de Tanzania. Otros 20.000 refugiados debían volver al país. El proceso de democratización alcanzó, de esta manera, resultados significativos hasta bien entrado 1992.

88. En este contexto, es importante resaltar que como resultado de las reformas antiapartheid emprendidas, se han creado comisiones investigadoras de los crímenes cometidos por miembros y organismos especiales de las Fuerzas de Defensa Sudafricanas (SADF) y de la policía. Tal como aparece en los informes anteriores y según se ha acreditado ante las comisiones investigadoras, hubo participación de mercenarios a quienes se les encomendó las acciones de mayor violencia en la aplicación de las políticas de apartheid. El Civil Co-Operation Bureau ha sido recientemente condenado por una comisión judicial por haber ordenado el asesinato de activistas antiapartheid y de otras personas percibidas como enemigas del Estado. Recientes denuncias se refieren a que dicho organismo aún estaría realizando actividades ilícitas a través de entidades y empresas de fachada. El antiguo director de un organismo de inteligencia militar, Ben Conradie, afirmó al diario sudafricano The Weekly Mail que la SADF habría realizado diversas actividades ilícitas a través de entidades como la empresa Eduguide CC. o de una red de entidades bajo la organización Adult Education Consultants de Pretoria. En este contexto, algunos miembros del Partido Libertad Inkatha y líderes vinculados a dicha organización habrían sido enviados por las fuerzas de seguridad sudafricanas a Israel, con el objeto de recibir entrenamiento militar. El Relator Especial ha recibido denuncias relativas a que en enero de 1991, nueve meses después que el Presidente de Klerk declarara que el apoyo encubierto del Gobierno a Inkatha había cesado, miembros de la policía sudafricana continuaron financiando las actividades de dicho partido.

89. Consta igualmente en los anteriores informes que grupos de población blanca, partidarios a ultranza del apartheid, se han organizado para resistir, apelando inclusive a la violencia, a las medidas de eliminación del régimen racista. Resulta así que mientras el Gobierno del Presidente de Klerk ha propiciado la distensión política, negociado con el ANC, propiciado los acuerdos de paz (14 de septiembre de 1991) entre las principales agrupaciones políticas y sindicales, alentando inclusive la creación de un Comité Nacional por la Paz y la celebración de una Convención por una Sudáfrica Democrática, y conseguido del Parlamento la derogación de las tres leyes sustantivas del régimen del apartheid, parte de la propia minoría blanca de la cual proviene, se resiste a reconocer el fin del sistema racista que le beneficiaba con privilegios absolutos y excluyentes.

90. Como se sabe, estos grupos, alentados inclusive por miembros del Partido Conservador, constituyeron aparatos paramilitares con componentes mercenarios, con la finalidad de "combatir por la supervivencia del pueblo blanco". Estos grupos pasaron rápidamente a la acción violentista, incluyendo el fomento a los enfrentamientos entre diversas etnias de Sudáfrica. Por esta razón y a pesar del esfuerzo de continuidad en el que se empeñó el Gobierno del Presidente de Klerk, no dejó de verse atrapado en estas contradicciones que no sólo han dificultado la fluidez en el proceso antiapartheid sino que también amenazan con paralizarlo.

91. El Partido Conservador y el Afrikaner Resistance Movement (AWB) se negaron a asistir a la Convención por una Sudáfrica Democrática de diciembre de 1991. Diez líderes del AWB fueron detenidos por la policía el 28 de enero de 1992, en relación con la participación de miembros de dicha organización en un enfrentamiento armado que dejó como saldo 58 heridos en 1991. Por otra parte, el Ministerio sudafricano de la Ley y el Orden anunció, el 16 de diciembre de 1991, el inicio de una investigación por el intento de secuestro del nieto del Presidente de Klerk, imputable a miembros del Boere-Weerstandsbeweging (BWB), quienes deseaban canjear al menor de cuatro años de edad por dos de sus militantes detenidos, uno de ellos, bajo la acusación de haber asesinado a siete personas miembros de la mayoría.

92. Durante 1992, estos grupos racistas llevaron a cabo una campaña de atentados terroristas contra escuelas multirraciales, sindicatos y juzgados. El líder de uno de dichos grupos, Robert van Tonder, declaró el 22 de abril de 1992 en Johannesburgo, que "la lucha armada es el único camino para asegurar la libertad de los boers". El 14 de marzo, 40 organizaciones racistas, entre las cuales cabe mencionar al Partido Conservador, el AWB y el Partido Nacional Reformado (HNP), suscribieron un acuerdo para "derrotar a Mandela y a de Klerk". Cabe mencionar que la organización autodenominada World Apartheid Movement contrató y utilizó los servicios del mercenario belga Jean Bultot como instructor en el uso de armas de guerra.

93. En marzo de 1992 y como una forma de superar el impasse y la oposición de las organizaciones racistas, reforzando su posición, el presidente de Klerk convocó a un referéndum de la minoría blanca para consultarle si apoyaba la continuación del proceso de reformas orientado a una nueva constitución a través de negociaciones. El resultado fue favorable a de Klerk, quien de este modo mejoró su situación en cuanto a capacidad política, para negociar acuerdos entre los distintos sectores organizados y particularmente con las organizaciones políticas. Sin embargo, el referéndum no resolvió cuestiones de procedimiento de la negociación, dando lugar a diversas proposiciones difíciles de promover el consenso. El ANC ha presentado su proyecto de Asamblea Constituyente según el cual las reformas deben provenir de una asamblea de 400 miembros elegidos mediante el sistema de representación proporcional y por sufragio universal. Pero el Gobierno no ha aceptado esta propuesta ni ninguna otra en que se deje de tener en cuenta las proposiciones de la minoría.

94. Este entrampamiento objetivo, que guarda relación directa con el modelo de democracia que realmente se quiere aceptar en Sudáfrica, está propiciando nuevos desencuentros y situaciones de violencia. La de más graves consecuencias respecto a la negociación fue la masacre de Boipatong, en los suburbios de Johannesburgo, que ocurriera el 17 de junio de 1992. En esta masacre, en la que murieron por lo menos 42 personas, la apariencia fue de un enfrentamiento interétnico, pero las denuncias señalan la instigación de grupos violentistas blancos y de mercenarios. La consecuencia de estos sucesos ha sido la negativa del ANC a continuar las negociaciones con el Gobierno al que acusa de una actitud doble, que evita una definición final contra el apartheid y por la democracia. El Presidente de Klerk ha señalado por su parte que el ANC sabotea las negociaciones, indicando que "quiere tomar el poder por la confrontación y la movilización", y negando al mismo tiempo cualquier responsabilidad del Gobierno, de la policía o de las fuerzas

armadas, como instigadores de actos de violencia. El 5 de agosto de 1992, tuvieron lugar en Pretoria y otras ciudades del país importantes manifestaciones por la paz y la democracia, que siguieron a dos días de huelga general decretada por el ANC, el Congreso Sudafricano de Sindicatos (COSATU) y el Partido Comunista (SACP).

95. En la situación descrita, el Relator Especial estima la necesidad de seguir de cerca la evolución de los acontecimientos en Sudáfrica, pues es objetivo el riesgo de un incremento de la violencia en cuyo contexto la presencia y utilización de mercenarios pudiera ser un avance. Pero también porque es otro riesgo objetivo el que no sólo pueda quedar paralizado el proceso de desmontaje del apartheid, sino el que puedan reforzarse las posiciones de retorno a un régimen de apartheid inclusive más endurecido. En estas circunstancias, el Relator Especial se ha dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, señor Pik Botha, planteándole la utilidad y conveniencia de una visita a Sudáfrica que permita al Relator Especial observar las investigaciones en curso y contribuir a la definitiva eliminación del recurso a actividades mercenarias, así como a la distensión y al retorno al diálogo político para la plena pacificación, democratización y desarrollo del país.

96. El Relator Especial reitera, como en sus anteriores informes, que la derogación del régimen de apartheid en Sudáfrica, la consolidación del proceso de paz y democratización, sin retrocesos ni concesiones, y el aumento de la conciencia cívica entre la población, significará el inicio de la distensión y el fin de los métodos de represión utilizados para imponer políticas racistas. Es obvio que si este fin se consigue, el recurso a utilizar mercenarios habrá también terminado. El Relator Especial estima por último que la comunidad internacional y especialmente los órganos de las Naciones Unidas que han venido propiciando la terminación del apartheid, que constituye una violación de los derechos humanos fundamentales del pueblo sudafricano y un crimen contra la humanidad, deben redoblar sus esfuerzos para que se ponga fin a la violencia racista, se superen las contradicciones y se puedan reiniciar las negociaciones tendientes a la paz y a la democratización de Sudáfrica. En este empeño, la contribución de los grupos de trabajo, comisiones y expertos que, desde sus respectivas áreas de especialización han venido trabajando contra el apartheid y en favor de la libertad y de los derechos humanos, debe ser alentada.

V. PRESENCIA DE MERCENARIOS EN LA ANTIGUA YUGOSLAVIA

97. La antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia, constituida en 1945 sobre el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos fundado en 1918, logró organizar un Estado en el que convivieron pueblos muy diferentes. Serbios herederos de la tradición bizantina y otomana y ortodoxos, croatas vinculados al mundo latino y católicos, albaneses, musulmanes, y otros, estructuraron un Estado que, en lo político, fue uno de los pilares constitutivos del Movimiento de Países No Alineados, y en lo económico, aplicó, aunque sin resultados exitosos, la novedad de un sistema autogestionario y de propiedad social. Sin embargo, el abandono de la mutua aceptación entre naciones y nacionalidades diferentes, de la tolerancia y el respeto entre etnias, religiones y costumbres diferentes y el olvido por las autoridades federales de la necesidad de actuar como tales, han ocasionado el estallido del antiguo Estado y la guerra más cruel en Europa desde 1945.

98. Luego de un corto conflicto en julio de 1991, el pueblo esloveno pudo constituirse en un Estado soberano e independiente y el Ejército Popular Yugoslavo debió retirarse de su territorio. El pueblo croata, sin embargo, debió luchar duramente. Durante los seis meses transcurridos entre agosto de 1991 y enero de 1992, la guerra en Croacia habría ocasionado la pérdida de 10.000 vidas y más de 600.000 refugiados y desplazados internos. Grandes extensiones de Croacia Oriental y Sudoccidental quedaron bajo el control del Ejército Popular Yugoslavo y de grupos paramilitares serbios. Según el Ministerio de Información de la República de Croacia, entre el 17 de agosto de 1990 y el 19 de enero de 1992, 1.493 civiles croatas identificados murieron, así como 1.593 miembros de la Guardia Nacional y de la Policía croatas, sin contar las víctimas no identificadas. Otras fuentes informaron al Relator Especial que el 26 de junio de 1992 la Corte Militar de Belgrado condenó a muerte a tres soldados croatas que participaron en la defensa de Vukovar. Sus nombres fueron dados como sigue: Nikola Cibaric, Martin Sabljic y Zoran Siposa.

99. Prácticamente todas las normas del derecho internacional humanitario, elaboradas a través de siglos con el objeto de humanizar los conflictos armados y reducir el sufrimiento que ocasionan, han sido violadas en esta guerra. La población civil ha sido objeto de ataques directos por ambas partes, orientados a su exterminación, a provocar terror, o a obligarla a abandonar sus lugares de residencia para constituir "zonas étnicamente limpias". Se ha negado asistencia médica a los heridos de guerra y enfermos, se ha dejado cadáveres sin enterrar durante días o se les ha colocado explosivos para que estallen, se han transformado las balas para aumentar el sufrimiento de los heridos y reducir sus oportunidades de sobrevivir e incluso se ha atacado, directamente, a personal de organizaciones humanitarias, médicos y personal sanitario, y miembros de organizaciones religiosas. Se ha torturado y maltratado a prisioneros de guerra y se ha destruido innecesariamente templos y monumentos culturales.

100. Durante la guerra en Croacia se celebraron 14 acuerdos de cese el fuego que fueron violados horas después de su concertación y utilizados solamente para la concentración y el redespliegue de fuerzas. Sin embargo, un nuevo acuerdo de cese el fuego alcanzado el 3 de enero de 1992 bajo los auspicios de las Naciones Unidas, ha reducido de manera significativa la intensidad del conflicto armado en Croacia.

101. No obstante, la antigua Yugoslavia se vio pronto sacudida por otro grave conflicto armado, esta vez en la República de Bosnia y Herzegovina, el cual estalló pese a las diversas rondas de negociaciones celebradas entre las comunidades musulmana, croata y serbia de dicha República y auspiciadas por la Comunidad Europea. Característica principal de este conflicto ha sido el bombardeo indiscriminado de ciudades y pueblos, principalmente de la capital de la República, Sarajevo, que ha afectado de manera particularmente cruenta a la población civil. Esta no sólo ha sufrido continuos ataques directos, sino que ha padecido la destrucción constante de la infraestructura de la República y de recursos indispensables para su supervivencia. De abril a julio de 1992, Sarajevo sufrió el bombardeo indiscriminado del Ejército Popular Yugoslavo y el sitio de las fuerzas paramilitares serbias, que han dejado totalmente destruidos los barrios antiguos de la ciudad habitados mayoritariamente por musulmanes. La capital de Herzegovina, Mostar, y la ciudad oriental de Tuzal

han sido también víctimas de continuos bombardeos y ataques con morteros, misiles y cohetes. Sólo durante los dos primeros meses de guerra en Bosnia y Herzegovina, 5.000 personas murieron o desaparecieron y más de 20.000 resultaron heridas, de acuerdo a cifras proporcionadas por el Estado Mayor de Seguridad Ciudadana de Belgrado. Por otra parte, la pseudo doctrina de la "purificación étnica" habría llevado a constituir diversos campos de concentración en territorio de Bosnia y Herzegovina, donde tendrían lugar atroces violaciones de los derechos humanos más elementales.

102. En una dramática invocación a la comunidad internacional formulada el 27 de mayo de 1992, el Comité de Crisis para la Salud y la Seguridad Social de la República de Bosnia y Herzegovina informaba que el conflicto armado afectaba al 75% del territorio de la República y a casi 3 millones de ciudadanos distribuidos en 72 comunidades; 5.170 personas habían muerto o desaparecido; 18.400 habían resultado heridas y de éstas, 7.500 habían resultado permanentemente inválidas; 580.000 personas habían perdido sus hogares y 640.000 se habían convertido en refugiados; 52 hospitales y centros de salud, incluyendo la maternidad de Sarajevo, fueron destruidos, así como centros de distribución de alimentos, almacenes, autobuses, líneas de ferrocarril y carreteras, a través de ataques sistemáticos orientados a dañar la infraestructura esencial de la República. Sólo la reapertura bajo control internacional de los aeropuertos de Sarajevo y Mostar y de los principales accesos terrestres a la capital, podía, en opinión del Comité de Crisis, permitir la llegada de la urgente ayuda internacional requerida. La resolución 761 del Consejo de Seguridad ha permitido efectivamente la reapertura, con algunas interrupciones, por fuerzas internacionales de las Naciones Unidas, del aeropuerto Butmir de Sarajevo y que se establezcan algunos corredores para el tránsito de la ayuda a los pueblos damnificados. No obstante los bombardeos han continuado y el número de víctimas de esta cruenta guerra aumenta día a día.

103. A diferencia de lo que ha ocurrido y ocurre en muchos otros conflictos armados en el mundo, las partes combatientes en las guerras de Croacia y de Bosnia y Herzegovina han mostrado una total falta de respeto hacia los símbolos y el personal de las instituciones internacionales y humanitarias, atentando incluso contra la vida e integridad física de quienes sólo persiguen disminuir el sufrimiento de la población civil y de los combatientes dados de baja. Grupos de ayuda humanitaria provenientes de organizaciones no gubernamentales, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Comunidad Europea, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, han sufrido graves atentados a lo largo de 1992, en su afán de aliviar los sufrimientos de la población civil y de los combatientes heridos. El 21 de mayo de 1992, el Consejo de Seguridad tuvo que protestar ante las autoridades de Belgrado por la actitud de falta de cooperación de los miembros del Ejército Popular Yugoslavo y de los grupos armados irregulares serbios, hacia el personal de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas.

104. Los hechos sumariamente expuestos son motivo de preocupación para la comunidad internacional. En el ámbito de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad ha adoptado acuerdos sustantivos destinados a poner fin a la guerra, a aliviar los sufrimientos de la población civil en general y a conseguir el transporte seguro de la ayuda humanitaria. Dentro de la Comisión de Derechos Humanos, las denuncias sobre violaciones graves a los derechos humanos

y a las leyes del derecho internacional humanitario han sido canalizadas para su investigación por los grupos de trabajo y relatores especiales correspondientes. Posteriormente, la Comisión de Derechos Humanos debió reunirse en forma extraordinaria para analizar la situación durante el 13 y 14 de agosto de 1992, decidiendo el nombramiento urgente de un Relator Especial. Para el Relator Especial que se ocupa de la utilización de mercenarios, la referencia a estos graves hechos es obligada por cuanto diversas fuentes, tanto oficiales como organizaciones no gubernamentales, y la prensa internacional, han denunciado la presencia de mercenarios, en relación con crímenes, torturas, y otros tipos de atrocidades absolutamente violatorias de los derechos humanos de las poblaciones afectadas por la guerra.

105. Es una cuestión concreta que varios pueblos de la ex República Federativa Socialista de Yugoslavia decidieron por autodeterminación su independencia y es también otra cuestión concreta que la guerra contra Croacia o contra Bosnia y Herzegovina es consecuencia de la no aceptación de esa independencia y de la integridad territorial de dichos Estados por Serbia y Montenegro. Tanto Croacia como Bosnia y Herzegovina, lo mismo que Eslovenia, se han constituido como Estados soberanos que las Naciones Unidas han reconocido e incorporado en su seno. La guerra y la ocupación de parte de sus territorios, significan formalmente un atentado contra la libre determinación de sus pueblos, aun cuando las autoridades federales alegaron que este derecho ya había sido ejercido al aprobar los pueblos de dichos Estados, la anterior Constitución yugoslava. El derecho de defensa de los Estados agredidos y el de organizar sus ejércitos nacionales tiene que ser dejado a salvo, aunque debe mencionarse la inclusión, como parte de los ejércitos nacionales, de voluntarios y brigadistas extranjeros.

106. No obstante, este último extremo, que se refiere a combatientes extranjeros, debe ser cuidadosamente aclarado y precisado, para evitar confusiones y el que mercenarios, profesionales de la guerra que se involucran en conflictos armados ajenos a su nacionalidad, los estimulan y los agravan por una paga, sean calificados equivocadamente y confundidos como generosos combatientes internacionalistas por la paz. Cualquiera sea el lugar y continente donde actúen, los mercenarios son gentes que lucran con la guerra, sin importarles valorativamente la causa a la que se vinculan ni la mayor violencia y destrucción que su presencia provoca. Está en efecto comprobado que los actos más feroces y criminales en conflictos armados internos o internacionales suelen correr por cuenta de agentes mercenarios especialmente contratados por su eficiencia para la comisión de crímenes de guerra y por su inhumanidad. En el caso que nos ocupa, las denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos son numerosas y demasiadas las veces en que la calificación aparece sumida en la de "fuerzas paramilitares", "brigadistas internacionales" y "voluntarios extranjeros".

107. Cuántos son los extranjeros que están actuando y combatiendo en los conflictos armados que se desarrollan en el territorio de la ex República yugoslava, en qué condición y calidad se encuentran allí, cómo llegaron, quién los llevó, en qué momento ingresaron y se vincularon a los aparatos de la guerra, son cuestiones que necesariamente se deben precisar con claridad, para que la conceptualización jurídica y la calificación del tipo individual sea correctamente formulada y perfectamente distinguible la atribución de responsabilidades. Las atroces violaciones de los derechos humanos y del

derecho internacional humanitario en esos escenarios de guerra no son en ningún caso justificables, pero si algunos de esos hechos se deben a mercenarios, la atribución de responsabilidades debería también alcanzar a quien los reclutó, contrató y vinculó. Diversas resoluciones de las Naciones Unidas han condenado, sin ninguna excepción, la utilización de mercenarios y es bajo este marco que debe precisarse la presencia de extranjeros señalados como mercenarios, en los conflictos armados en los territorios de la antigua Yugoslavia.

108. El Relator Especial, dado lo delicado de la situación, ha preferido como procedimiento previo antes de cualquier opinión definitiva, dirigirse oficialmente a las partes interesadas, para recabar de ellas información que aclare la situación del personal extranjero involucrado en acciones militares, así como el vínculo jurídico determinante. En este sentido, ha dirigido comunicaciones a los Ministerios de Asuntos Exteriores de las Repúblicas de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, y de la República Federativa de Yugoslavia, solicitándoles información detallada sobre lo siguiente:

a) Existencia de efectivos militares extranjeros en su República, que no provengan de convenios internacionales de asistencia militar celebrados por su país, ni que correspondan a las fuerzas militares que las Naciones Unidas han destacado a esa zona como parte de la Fuerza de Protección;

b) Condición en la que ese personal extranjero fue reclutado y entrenado; funciones de tipo militar que cumplen en su país y su participación efectiva en el conflicto militar que afecta a su Estado, a los efectos de tener en cuenta la calificación de este personal, de acuerdo a las normas internacionales vigentes sobre la materia;

c) Relación y ligazón con las fuerzas armadas regulares de su Estado y la condición y calificación que su Gobierno otorga a estos efectivos militares extranjeros;

d) Finalmente, informaciones precisas que su Gobierno pudiera proporcionarme sobre la presencia de fuerzas mercenarias involucradas en el conflicto militar y que estuvieran realizando actividades a favor de la otra parte en el conflicto.

109. Asimismo, el Relator Especial confía en obtener información útil de las organizaciones no gubernamentales y de organismos internacionales gubernamentales, en el ánimo de ofrecer un análisis completo en su informe definitivo ante la Comisión de Derechos Humanos en su 49º período de sesiones.

VI. ESTADO ACTUAL DE LA CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA EL RECLUTAMIENTO, LA UTILIZACION, LA FINANCIACION Y EL ENTRENAMIENTO DE MERCENARIOS

110. La Asamblea General, consciente de la utilización, reclutamiento, financiación y entrenamiento de mercenarios para actividades que quebrantan principios de derecho internacional tales como los de la igualdad soberana, la independencia política y la integridad territorial de los Estados, así como el de la libre determinación de los pueblos, aprobó y abrió a la firma y

ratificación o a la adhesión, la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, mediante su resolución 44/34 adoptada el 4 de diciembre de 1989. La Asamblea General contribuyó, de esta manera, al desarrollo progresivo y a la codificación del derecho internacional sobre la materia, reafirmando los propósitos y principios consagrados en los Artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, de 24 de octubre de 1970).

111. La entrada en vigor de la Convención significará una ampliación, profundización, mayor precisión y actualización de la regulación internacional para prevenir, perseguir y sancionar el recurso al reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. Asimismo, aumentará y desarrollará la cooperación entre los Estados para erradicar dichas actividades y coadyuvará a la observancia de los propósitos y principios consagrados por la Carta de las Naciones Unidas. Por estas razones, el Relator Especial observa con preocupación que, hasta el momento de terminar la redacción del presente informe, sólo cinco Estados han culminado los procesos constitucionales conducentes a la expresión de su consentimiento en obligarse por la Convención: Barbados, que adhirió a la misma el 10 de julio de 1992; Maldivas, que la suscribió el 17 de julio de 1990 y la ratificó el 11 de septiembre de 1991; Seychelles, que adhirió a la Convención el 12 de marzo de 1990; Suriname, que la suscribió el 27 de febrero de 1990 y la ratificó el 10 de agosto de dicho año; y Togo, que depositó su instrumento de adhesión el 25 de febrero de 1991.

112. Cabe también informar que otros 14 Estados han suscrito la Convención: Alemania (20 de diciembre de 1990), Angola (28 de diciembre de 1990), Bielorrusia (13 de diciembre de 1990), Camerún (21 de diciembre de 1990), Congo (20 de junio de 1990), Italia (5 de febrero de 1990), Marruecos (5 de octubre de 1990), Nigeria (4 de abril de 1990), Polonia (28 de diciembre de 1990), Rumania (17 de diciembre de 1990), Ucrania (21 de septiembre de 1990), Uruguay (20 de noviembre de 1990), Yugoslavia (12 de diciembre de 1990) y Zaire (20 de marzo de 1990).

113. La Convención debe entrar en vigor el trigésimo día a partir de la fecha de depósito del vigésimo segundo instrumento de ratificación o adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, en virtud de lo dispuesto por el numeral primero de su artículo 19. El Relator Especial debe necesariamente llamar la atención al hecho de la lentitud del proceso de expresión del consentimiento en obligarse por la Convención Internacional a través de la ratificación o la adhesión, pues hasta el momento sólo cinco Estados han culminado dicho proceso.

114. El Relator Especial no puede menos que dejar constancia de una contradicción preocupante: la comunidad internacional, a través principalmente de la acción de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana, ha avanzado y conseguido logros importantes en su lucha por eliminar el recurso a las actividades mercenarias. Sin embargo, el instrumento convencional aprobado por la Asamblea General y concertado bajo sus auspicios para prevenir y sancionar dichas actividades, no puede entrar

en vigor, tres años después de su adopción, porque no existe el número suficiente de Estados partes. La Convención confirma el carácter jurídico de las múltiples resoluciones y declaraciones de las Naciones Unidas que condenan las actividades vinculadas a los mercenarios, y afirma que el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios deben ser considerados como delitos de grave preocupación por todos los Estados, estableciendo que las personas que cometan dichos delitos han de ser sometidas a juicio o ser objeto de extradición. La vigencia de la Convención es pues indispensable para que sea más eficaz la cooperación internacional entre los Estados para la prevención, el enjuiciamiento y el castigo de esos delitos.

115. No obstante el retardo en la entrada en vigor de la Convención, el Relator Especial debe recordar la plena vigencia de los principios del derecho internacional y de las normas del derecho internacional consuetudinario y convencional aplicables para la erradicación de estas actividades reprobables que tanto han afectado y afectan el goce de los derechos humanos y el ejercicio del derecho de los pueblos a su libre determinación.

VII. CONCLUSIONES

116. La ininterrumpida condena por la Asamblea General, por el Consejo Económico y Social y por la Comisión de Derechos Humanos a la utilización de mercenarios y su reclutamiento, financiación y entrenamiento, configura un definitivo rechazo a esta actividad delictiva que atenta contra la libre determinación y los derechos humanos de los pueblos que sufren la presencia de mercenarios. En este sentido, es consistente con esta condena el que los Estados no sólo se abstengan de reclutar, permitir o tolerar actos mercenarios, sino que además deben adoptar las medidas necesarias y ejercer el máximo de vigilancia contra la amenaza de estas actividades, incluyendo medidas legislativas que prevean los distintos tipos delictivos configurados en una actividad mercenaria. Se podría en esos términos concluir que el pensamiento de las Naciones Unidas es de total y absoluto rechazo y condena a las actividades de los mercenarios.

117. Sensiblemente, fluye de las informaciones recogidas por el Relator Especial, que la humanidad sigue sufriendo actividades y hechos criminales a cargo de mercenarios, que afectan tanto la libre determinación de los pueblos como los derechos humanos. La modalidad habitual y mejor identificada es cuando mercenarios se involucra en conflictos armados, trabajando por una paga para una de las partes en el conflicto y practicando los hechos más feroces de crímenes, tortura, sabotaje y destrucción de infraestructura. Estas actividades también han aparecido vinculadas a otros hechos criminales, tales como el terrorismo, el tráfico de armas y el narcotráfico. Lo que la información recibida comprueba es que existe una oferta de recursos mercenarios disponibles y grupos organizados para realizar actividades ilícitas que en sustancia afectan a la soberanía de un Estado y la libre determinación de un pueblo o a la estabilidad de un gobierno constitucionalmente establecido. Es el caso de las vinculaciones existentes entre bandas de traficantes de drogas y de traficantes de armas, con grupos armados irregulares que recurren al terrorismo, y con mercenarios, los cuales intercambian favores entre sí y se prestan mutuo apoyo, afectando con su violencia tanto a un país o a un pueblo determinado, como a la comunidad internacional en su conjunto.

118. Dentro de los delitos condenados internacionalmente en que están involucrados los mercenarios, se encuentran aquellos en los cuales éstos actúan como bandas interconectadas a las de traficantes de armas, de drogas y terroristas. Así, un grupo armado irregular que practica el terrorismo puede convertirse en grupo mercenario al desplazarse al territorio de otro Estado, para cubrir y otorgar protección, por paga, a una banda de narcotraficantes, o para ocupar una porción de territorio extranjero, sustituyendo a la autoridad del Estado soberano.

119. En el curso de los años 1991 y 1992, el número de países afectados por conflictos armados ha aumentado. Africa sigue siendo sin embargo el continente más afectado por la presencia de mercenarios que se involucran en estos conflictos. Sin embargo, algunos de los conflictos en Africa meridional, en cuyo desarrollo se constató la presencia de mercenarios, han proseguido su cauce de negociación política y pacificación. En este contexto, al bajar o terminarse las acciones armadas, han disminuído también las actividades mercenarias.

120. En el caso de Angola, los Acuerdos de Paz suscritos en Lisboa entre el Gobierno del Presidente Dos Santos y la UNITA, han seguido un curso de cumplimiento por ambas partes, a pesar de dificultades puntuales que han logrado superarse. En septiembre de 1992 se realizará uno de los acuerdos más importantes, cual es la realización de elecciones democráticas. En este sentido, el Relator Especial ha coincidido con el Gobierno de Angola en la consideración de que las actividades mercenarias como fenómeno, han perdido capacidad de actuación en la República Popular de Angola.

121. Diversas informaciones y denuncias recibidas por el Relator Especial en torno al conflicto armado interno en Liberia, indican un peligro real de internacionalización que puede involucrar a los Estados de Guinea y Sierra Leona, por una parte, y Burkina Faso y Côte d'Ivoire, por la otra, con el riesgo adicional de un recurso mayor a la presencia de mercenarios. De hecho, éstos han sido mencionados en varias denuncias que también hacen referencia a graves violaciones de los derechos humanos.

122. El conflicto armado que involucra al Gobierno de Mozambique con la RENAMO, se mantiene sustantivamente en el mismo nivel de hostilidades, a pesar de las recientes negociaciones para ponerle fin. Este conflicto, probablemente el más cruento de Africa meridional, se ha caracterizado por la intervención de Potencias extranjeras y por la activa presencia de grupos mercenarios. Las negociaciones para poner fin al conflicto, sólo han obtenido hasta la fecha resultados parciales e inestables, tales como acuerdos de alto el fuego parcial en algunos corredores de tránsito en la zona, que han sido sometidos a ataques militares por la RENAMO. No obstante, las negociaciones continúan bajo la observación oficial de los Gobiernos de Botswana, Italia y Zimbabwe, y el pedido del Gobierno de Mozambique para que los Estados Unidos de América y el Reino Unido también actúen como observadores oficiales. Adicionalmente, el Gobierno ha dado curso a algunas iniciativas de democratización, con el propósito de aligerar las negociaciones con la RENAMO y producir una apertura democrática. Debe, sin embargo, destacarse los recientes acuerdos alcanzados entre el Presidente de Mozambique y el Jefe de la RENAMO, que se han comprometido en Roma a celebrar un acuerdo de paz

definitivo antes del 1° de octubre de 1992, y a celebrar elecciones pluralistas y representativas en el plazo de un año a partir de la firma de dicho acuerdo.

123. Durante largos años, la política del apartheid aplicada por Sudáfrica, fue causa de perturbaciones en toda la región de Africa meridional. El sistema de discriminación racial, que constituye en sí mismo un crimen contra la humanidad y una violación de los derechos humanos fundamentales, no sólo se limitó a Sudáfrica, sino que funcionarios civiles y militares sudafricanos participaron en actividades ilícitas contra la soberanía y la libre determinación de otros pueblos de Africa meridional. El uso de mercenarios fue uno de los recursos a los que se apeló para imponer, consolidar y proteger la política racista del apartheid, así como para interferir en la libre determinación de otros pueblos africanos. Esta participación de mercenarios, denunciada en varios conflictos de la región, así como su utilización para atentar contra dirigentes del ANC, ha sido materia de diversas investigaciones judiciales actualmente en curso en Sudáfrica, las mismas que están confirmando la participación de mercenarios en actividades criminales.

124. El proceso iniciado por el Presidente Frederik W. de Klerk para desmontar el régimen del apartheid ha continuado y la derogación de las principales leyes del sistema ha creado el espacio para adoptar una organización política, social y económica abierta, no racial y democrática. La política del Presidente de Klerk ha sido respaldada en referéndum y se encuentran funcionando comisiones investigadoras de los crímenes cometidos por miembros y organismos especiales de las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica (SADF) y de la policía sudafricana, habiéndose acreditado ante tales comisiones investigadoras la participación de mercenarios a quienes se les encomendó las acciones de mayor violencia en la aplicación de las políticas de apartheid.

125. No obstante los importantes avances y la existencia de un foro por una Sudáfrica Democrática, el proceso sufre de entrampamientos que impiden la discusión y adopción de una Constitución democrática, con la participación en igualdad de condiciones de toda la población. Esto ha dado lugar a tensiones entre el Gobierno y el ANC, en cuyo contexto se han producido hechos violentos como la masacre de Boipatong, en los suburbios de Johannesburgo, el 17 de junio de 1992, durante la cual murieron 42 personas en un aparente enfrentamiento interétnico, pero en la cual, según denuncias recibidas, se habría constatado la instigación de grupos violentistas blancos y de mercenarios.

126. Las informaciones recibidas por el Relator Especial confirman que diversos grupos de la población minoritaria blanca sudafricana, han constituido organizaciones racistas con componentes paramilitares y con presencia de mercenarios, para oponerse por medios violentos al proceso de democratización y defender la vigencia del régimen del apartheid. No puede por tanto considerarse que la situación en Sudáfrica esté definitivamente en favor de la democracia y del desmontaje del apartheid; las tendencias en contra de dicho proceso desarrollan una creciente actividad violentista que debe obligar a la comunidad internacional a mantenerse atenta y perseverante en las medidas contra el sistema de discriminación racial.

127. El presente informe preliminar se ocupa también de los graves hechos que se vienen produciendo en antiguos territorios de la ex República Federativa Socialista de Yugoslavia. Fluye de todas las informaciones recibidas que varios pueblos de dicha ex República decidieron por autodeterminación su independencia y constitución en Estados soberanos, lo cual fue contestado con la guerra, primero contra Croacia y luego contra Bosnia y Herzegovina, por parte de Serbia y Montenegro, en desconocimiento de la soberanía, independencia e integridad territorial de dichos Estados. Tanto Croacia como Bosnia y Herzegovina se han constituido en Estados soberanos e independientes que las Naciones Unidas han reconocido en su seno. La guerra y la ocupación de parte de sus territorios, significan un flagrante atentado contra la soberanía y la libre determinación de sus pueblos. El derecho de legítima defensa de los Estados agredidos debe ser dejado a salvo.

128. En el curso de estas guerras se ha constatado la violación de elementales derechos humanos y de prácticamente todas las normas del derecho internacional humanitario. La población civil en Croacia y en Bosnia y Herzegovina ha sido víctima de ataques directos orientados a su exterminio, a provocar tensión o a obligarla a abandonar sus lugares de residencia para constituir "zonas étnicamente limpias" en ejercicio de la denominada "doctrina de purificación étnica". En el caso de Bosnia y Herzegovina se ha constatado también la existencia de campos de concentración para prisioneros, principalmente musulmanes, donde se habrían cometido atroces violaciones de los más elementales derechos humanos. Se ha negado asistencia médica a los heridos de guerra y enfermos; se ha dejado cadáveres sin enterrar durante días o se les ha colocado explosivos para que estallen; se han transformado las balas para aumentar el sufrimiento de los heridos y reducir sus oportunidades de sobrevivir e incluso se ha atacado, directamente, a personal de organizaciones internacionales, humanitarias, médicos y personal sanitario, y miembros de organizaciones religiosas. Se ha torturado y maltratado a prisioneros de guerra y se ha destruido innecesariamente templos y monumentos culturales e infraestructura básica para la supervivencia de la población civil.

129. El Relator Especial ha debido ocuparse de los graves hechos que se vienen produciendo en los territorios de la ex República Federativa Socialista de Yugoslavia, por cuanto diversas fuentes, tanto oficiales como organizaciones no gubernamentales, así como la prensa internacional, han denunciado la presencia de mercenarios en relación con crímenes, torturas y otros tipos de atrocidades absolutamente violatorias de los derechos humanos de las poblaciones afectadas por la guerra. Dada la presencia de combatientes extranjeros, el Relator Especial ha concluido que es necesario que la situación de éstos sea cuidadosamente aclarada y precisada, para evitar confusiones y el que mercenarios, profesionales de la guerra, que se involucran en conflictos armados ajenos a su nacionalidad y los estimulan por una paga, sean calificados equivocadamente, y confundidos como generosos combatientes internacionalistas por la paz.

130. La confusión respecto del estatuto y la situación jurídica de los extranjeros que actúan militarmente en territorios de Croacia y de Bosnia y Herzegovina es un hecho objetivo y debe ser declarado, dadas las denuncias

sobre graves violaciones a los derechos humanos que indistintamente se imputan a mercenarios, fuerzas paramilitares, "expertos extranjeros", "voluntarios internacionales", "brigadistas", etcétera. El Relator Especial ha concluido por lo tanto en la necesidad de dirigir comunicaciones a los Ministerios de Asuntos Exteriores de las Repúblicas de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia y de la República Federal de Yugoslavia, solicitándoles información precisa sobre la presencia de efectivos militares extranjeros en sus respectivos territorios, que no provengan de convenios internacionales de asistencia militar de los que son partes, ni que correspondan a las fuerzas militares que las Naciones Unidas han destacado a esa zona como parte de las Fuerzas de Protección. Asimismo el Relator Especial confía en obtener nueva información útil y precisa de organizaciones no gubernamentales y de organismos internacionales gubernamentales sobre la presencia de mercenarios en este grave conflicto.

131. La Convención, requiere para su entrada en vigor de la ratificación o adhesión de 22 Estados. Sin embargo hasta la fecha de redacción del presente informe, sólo cinco Estados han concluido los procesos constitucionales conducentes a la expresión de su consentimiento en obligarse por la Convención (Barbados, Maldivas, Seychelles, Suriname y Togo). Se concluye entonces que existe atraso en las ratificaciones y adhesiones necesarias para su pronta entrada en vigor, dificultándose así la cooperación entre los Estados para prevenir, perseguir, sancionar y erradicar las actividades mercenarias.

VIII. RECOMENDACIONES

132. Tomando en cuenta el conjunto de las resoluciones de las Naciones Unidas en favor de la independencia y del derecho a la libre determinación de los pueblos sometidos a situaciones de colonialismo y de dominación u ocupación extranjera, así como las resoluciones que directamente condenan la utilización de mercenarios para violar los derechos humanos e impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a su libre determinación, se recomienda a la Asamblea General la reiteración de estas posiciones y el consiguiente refuerzo de los principios de soberanía, igualdad jurídica, independencia de los Estados y de la libre determinación de los pueblos, condenándose expresamente la utilización, la financiación, el reclutamiento y el entrenamiento de mercenarios para atentar contra estos principios fundamentales.

133. A pesar del fin de la guerra fría y de la distensión global, el número de conflictos armados ha aumentado en el mundo y, en otros casos, la intensidad de los conflictos existentes se ha elevado, presentándose focos de violenta confrontación en prácticamente todos los continentes. De acuerdo a los antecedentes acumulados, estos conflictos han facilitado la oferta de mercenarios dispuestos a involucrarse en los mismos. Al mismo tiempo, las actividades mercenarias han aparecido vinculadas también a otros hechos internacionalmente ilícitos, tales como el terrorismo, el tráfico de armas y el narcotráfico. Por lo tanto, es recomendable que los Estados tomen conciencia de esta grave situación y que se formulen disposiciones y acuerdos precisos, para que tanto al nivel del derecho internacional, como en las legislaciones internas, se adopten medidas de acción preventiva, así como punitivas, que prevengan, persigan y sancionen severamente las actividades mercenarias.

134. Se recomienda que la Asamblea General y otros órganos de las Naciones Unidas propongan a los Estados Miembros la inclusión o puesta al día, en sus legislaciones internas, la tipificación del reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios como delitos, comprendiéndose tanto las actividades realizadas en sus territorios, como el tránsito de mercenarios a través de éstos; que prohíban a sus nacionales servir como mercenarios y que consideren como agravante su participación en actos concurrentes tales como el tráfico de armas, de drogas y de dinero mal habido; que asimismo suscriban acuerdos de extradición, para que sean aplicados cuando nacionales de su país sean reclamados por los Estados afectados, en base a su probada participación en actos contrarios al goce de los derechos humanos y al ejercicio de la soberanía de sus Estados, la estabilidad constitucional de sus gobiernos y la libre determinación de sus pueblos.

135. Aun cuando el Africa meridional sigue siendo afectada por la presencia de mercenarios, es un hecho objetivo la evolución favorable y la progresiva normalización hacia la paz total en Angola, incluyendo el proceso político de democratización en dicho país. Los mercenarios que actuaron en el conflicto interno han dejado de hacerlo, según manifiesta el propio Gobierno de Angola. Por lo tanto se recomienda respaldar el proceso de pacificación en dicho país, así como la democratización en curso, reiterándose al mismo tiempo la atención permanente de la comunidad internacional en defensa de los derechos del pueblo angoleño al pleno respeto de su libre determinación, al goce de los derechos humanos y al desarrollo.

136. Teniendo en cuenta la evolución del conflicto armado interno en Liberia, se recomienda instar a las partes a adoptar las medidas conducentes a la solución del conflicto por la vía del diálogo y la negociación política, evitando los peligros de la internacionalización de este conflicto, así como proscribiendo el recurso a la utilización de mercenarios.

137. El Relator Especial, considerando la situación de estancamiento en el conflicto armado que aún subsiste en Mozambique, recomienda respaldar las recientes negociaciones para ponerle fin e inaugurar un proceso de reconciliación, paz, democracia y desarrollo. En este sentido debe encomiarse la disposición de los Gobiernos de Botswana, Italia y Zimbabwe, para actuar como observadores oficiales, recomendando asimismo que se atiendan los pedidos del Gobierno de Mozambique para que se sumen otros gobiernos, reforzándose así las perspectivas de éxito en las negociaciones en curso por la paz. En el contexto de esta recomendación, el Relator Especial señala que Mozambique ha sido y sigue siendo uno de los países más afectados por la presencia activa de mercenarios en su territorio.

138. A pesar de dificultades y resistencias internas, ha seguido avanzando el proceso de desmantelamiento y desmontaje de régimen del apartheid en Sudáfrica, que impulsa el Gobierno del Presidente de Klerk. No obstante, tal desmantelamiento no puede dejar sin sanción los crímenes cometidos contra la población mayoritaria de Sudáfrica, para obligarla a aceptar el apartheid, crímenes en los que, al lado de los aparatos represivos del Estado, actuaron mercenarios que gozaban de protección política y policial. Se recomienda por tanto que junto a la insistencia para poner un definitivo término al régimen de discriminación racial en Sudáfrica, sustituyéndolo por un sistema

plenamente democrático, se investigue judicial y exhaustivamente los hechos criminales realizados dentro y fuera de Sudáfrica, en relación al sostenimiento y protección del régimen del apartheid y en violación de los derechos humanos de la población sudafricana y del derecho a la libre determinación de otros pueblos africanos. Esta recomendación pone especial énfasis en la necesidad de investigar y sancionar judicialmente a los mercenarios que participaron en hechos criminales probados.

139. Teniendo en cuenta la evolución del proceso de desmantelamiento del régimen del apartheid, y el respaldo que por referéndum ha obtenido el Presidente de Klerk por parte de la minoría blanca, se recomienda apoyar dicho proceso en la medida en que sea integral, basado en la participación con igualdad de derechos de toda la población de Sudáfrica y que signifique la instauración de un sistema democrático constitucional, sin exclusiones de ningún tipo. La presente recomendación pone énfasis en los actuales riesgos y peligros de reversibilidad del proceso en curso, dada la existencia de grupos de la minoría blanca organizados para bloquear el proceso, practicar la violencia, estimular los enfrentamientos étnicos e impedir la igualdad de derechos civiles y políticos. Estos grupos han contratado mercenarios conocidos y están actuando con gran violencia. En opinión del Relator Especial, las medidas adoptadas internacionalmente contra el apartheid deben mantenerse, hasta la consolidación plena del proceso de democratización y distensión, el total desmantelamiento del sistema de discriminación racial y la instalación de un sistema efectivamente democrático que garantice el goce pleno de los derechos humanos de toda la población.

140. Con relación a los graves hechos que se vienen produciendo en territorios que formaron parte de la ex República Federativa Socialista de Yugoslavia, en los cuales Estados reconocidos como Miembros de las Naciones Unidas se encuentran actualmente siendo afectados por una agresión en contra de los derechos humanos y del derecho a la libre determinación de sus pueblos, se recomienda tomar en cuenta que en esta guerra, llevada a cabo primero en territorios de Croacia y luego en territorios de Bosnia y Herzegovina, se han cometido las más feroces violaciones de los derechos humanos, habiéndose inclusive violentado las más elementales disposiciones del derecho internacional humanitario. La comunidad internacional debe tomar una mayor conciencia de los actos atroces cometidos contra la población civil, particularmente, en las actuales circunstancias, contra la población civil de Bosnia y Herzegovina, y de la participación en la comisión de dichos graves actos y crímenes de mercenarios de diversas nacionalidades que se han involucrado en esta guerra en búsqueda de una remuneración por sus ilícitos servicios.

141. Se recomienda asimismo que a través de la Asamblea General y de otros órganos de las Naciones Unidas, se solicite precisiones a todos los Estados involucrados en esta guerra, con la finalidad de dejar claramente establecida la condición y el carácter de los extranjeros que se encuentran actualmente combatiendo y prestando servicios militares y que no provienen de convenios internacionales de asistencia militar, ni corresponden a las fuerzas militares que las Naciones Unidas han destacado a esa zona como parte de la FORPRONU. De esta manera se podrá distinguir entre quienes actúan desinteresadamente en favor de la paz, y mercenarios camuflados como "brigadistas internacionales" o "voluntarios extranjeros" que están actuando por una paga.

142. Con relación a la Convención, se recomienda a la Asamblea General que exhorte a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas para que consideren pronto la conveniencia de ratificarla o de adherirse a la misma. Su entrada en vigor es necesaria, porque es un instrumento indispensable para que los pueblos estén seguros y libres de actividades mercenarias que amenacen el ejercicio pleno de su derecho a la libre determinación y la plena vigencia y goce de los derechos humanos.

